

serie de publicaciones acerca de los impactos de
la globalización corporativa sobre la biodiversidad



**Friends of
the Earth**
International

biodiversidad & co.

resistencia fecunda en agrobiodiversidad

comunidades locales en defensa de la
diversidad agrícola contra los ogms
y la agroindustria | agosto de 2002





resistencia fecunda en agrobiodiversidad

comunidades locales en defensa de la diversidad agrícola contra los ogms y la agroindustria | agosto de 2002

índice

introducción: luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad

por alberto villarreal, redes - amigos de la tierra uruguay parte una | 2

resistiendo al unilateralismo: defensores de la bioseguridad versus ee.uu.

por juan lopez - amigos de la tierra europa parte dos | 13

resistencia contra los ogms en la ayuda alimentarie: el caso de la ayuda alimentaria transgénica en nicaragua

por julio sánchez, centro humboldt/amigos de la tierra nicaragua parte tres | 16

resistencia contra los ogms en centros de origen: el caso de la papa en bolivia

por maría luisa ramos, fobomade, bolivia parte cuatro | 21

resistiendo las importaciones baratas y la 'liberalización del mercado': el caso de los cultivadores de frijol en uruguay

por redes, amigos de la tierra, uruguay y

josé p. sánchez, milton silveira, carmen améndola parte cinco | 24

resistiendo la privatización del agua y la agricultura de la revolución verde: el caso de la liberalización de los servicios y el agua de riego en ecuador

por cecilia chérrez, acción ecológica parte seis | 30

resistiendo la imposición de semillas transgénicas para la industria textil: el caso del algodón bt en indonesia

por walhi/amigos de la tierra indonesia parte siete | 35

contaminación genética y derechos de los agricultores: el caso de percy schmeisser contra la monsanto en Canadá

por juan lopez, amigos de la tierra europa, y larry bohlen, amigos de la tierra ee.uu. parte ocho | 40

recomendaciones parte nueve | 42



luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad | parte una

por alberto villarreal, redes/amigos de la tierra, uruguay

acción local comunitaria versus maquillaje verde gubernamental

La resistencia local toma muchas formas. Algunos han tomado medidas directamente para destruir las pruebas de campo de los cultivos transgénicos, como en la India, Indonesia y el Brasil por parte de miembros de la Vía Campesina. Las autoridades locales han prohibido a los OGMs, como en el Estado de Rio Grande do Sul en el sur de Brasil. Las coaliciones de la sociedad civil han luchado para que la legislación estableciera territorios "libres de OGMs", como en el caso de Nicaragua, o utilizan la acción judicial para impugnar las leyes que permiten el ingreso de OGMs, como en el caso de Indonesia.

Organizaciones activas del ámbito local han tomado medidas para proteger, conservar y reproducir las variedades de semillas tradicionales locales, como es el caso del proyecto internacional "Cultivando Biodiversidad" auspiciado por GRAIN. Estas estrategias también son promovidas en los casos de Bolivia, Canadá, Ecuador, Indonesia, Nicaragua y Uruguay.

Los siete casos de estudio en esta publicación reflejan claramente muchas de las tensiones crecientes y los conflictos entre estos actores que defienden el interés público, y los organismos internacionales y las empresas de biotecnología y el sector agroindustrial y alimentario que pretenden imponer el modelo de desarrollo agropecuario de la Revolución Verde y su nueva revolución genética. Los gobiernos nacionales -- como el de EE.UU.-- abrazan abiertamente los intereses de esas empresas y los promueven en los organismos multilaterales, o finalmente claudican ante sus intolerables presiones, cediendo la soberanía de sus pueblos.



Las comunidades locales, los pueblos indígenas y las ONGs no son signatarios de ningún instrumento vinculante para proteger la agrobiodiversidad. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que tales organizaciones sociales son las que han asumido seriamente la tarea de dar cumplimiento a las metas explicitadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y los capítulos 14 y 15 de la Agenda 21. Son ellas quienes están luchando por mantener prácticas ancestrales de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, profundamente integradas en la cultura de las comunidades campesinas e indígenas, resistiendo activamente la liberalización del comercio agropecuario que atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias y la invasión de los organismos genéticamente modificados (OGMs) en la agricultura, impulsada por grandes empresas transnacionales. Por contraste, los gobiernos están permitiendo activa o pasivamente que la Organización Mundial de Comercio (OMC) establezca reglas favorables a un creciente control del sistema alimentario por parte de unas pocas empresas transnacionales. Esas reglas resultan en la destrucción de las comunidades rurales y la imposición de sistemas de producción agrícola basados en una fuerte dependencia en los insumos y paquetes tecnológicos de esas mismas empresas, incluidas las semillas transgénicas que amenazan destruir la diversidad biológica y cultural.

imponen el modelo de producción agropecuaria de la revolución verde

Asimismo, muchos gobiernos han demostrado su falta de compromiso con el Convenio de Diversidad Biológica y la Agenda 21 en su escasa voluntad política para ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y establecer legislación precautoria, dejando en evidencia que su adhesión al CDB y la Agenda 21-en el mejor de los casos- no es más que un intento de limpiar su imagen maquillándose de verde.

La responsabilidad de que continúe fracasando la ratificación del Protocolo de Bioseguridad recae sobre los gobiernos nacionales. Pero una visión de conjunto de los factores que inciden en la erosión creciente de la biodiversidad para el sustento, la falta de avance en la aplicación de la Bioseguridad y la expansión libre de los OGMs debe incluir el papel de las autoridades de EE.UU. y la poderosa presión de la industria de biotecnología, además del papel precursor del Banco Mundial (y los bancos regionales como el BID) y el FMI en la imposición del modelo de desarrollo agropecuario de la Revolución Verde y las medidas de liberalización del comercio que hoy se pretende sellar definitivamente a través de la OMC y un complejo rompecabezas de tratados de libre comercio regionales y bilaterales. Estas fuerzas están imponiendo a sangre y fuego la diseminación internacional de los OGMs y los monocultivos para la exportación usando las reglas y mecanismos de acatamiento de la OMC, las políticas del Banco Mundial sobre Desarrollo Rural, las condicionalidades impuestas por el FMI y las políticas conjuntas del FMI/BM con sus pretendidas respuestas a la crisis de la deuda y la reducción de la pobreza en el mundo.

la influencia de la omc

Las reglas de la OMC sugieren que las medidas para garantizar el control precautorio sobre la expansión de OGMs es una medida "distorsionante del comercio". Asimismo son consideradas cualesquier medidas de protección de la agricultura familiar, campesina e indígena. Estos son los únicos sistemas de producción potencialmente capaces de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos proveyendo alimentos inocuos y de buena calidad para todos, protegiendo y enriqueciendo al mismo tiempo la biodiversidad. La fuerte influencia de la OMC sobre otras instituciones multilaterales tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) conjuntamente con el poder ejercido por EE.UU. y sus acuerdos de inversión y comercio bilaterales han aniquilado repetidamente los esfuerzos de los países para establecer controles sobre los OGMs y protecciones para la producción agropecuaria nacional destinada al consumo interno.

luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad | parte una

por alberto villarreal, redes/amigos de la tierra, uruguay

presiones directas de ee.uu.

Los casos de Sri Lanka, Bolivia e Indonesia presentados en esta publicación atestiguan la presión directa de las autoridades de EE.UU. y/o de los gigantes de la biotecnología como Monsanto. Todos los casos de resistencia local que presentamos a continuación también ponen al descubierto la dinámica de una situación compleja. Ellos ilustran la posición clave de los OGMs en el proceso de globalización económica impulsado por las grandes empresas, que junto con el modelo de desarrollo agropecuario de la Revolución Verde se están ocupando de la pérdida creciente de la biodiversidad.

la dinámica de las biotecnologías modernas

El crecimiento ilimitado es un rasgo inherente a esta dinámica global, y la ingeniería genética y otras biotecnologías modernas constituyen oportunidades demasiado atractivas de reproducción del capital como para que las corporaciones las dejen pasar. La biotecnología es un sector industrial muy dinámico y de concentración muy rápida en la cual aproximadamente diez conglomerados gigantes - incluyendo Monsanto, Aventis, Syngenta y Dupont - dominan y aspiran a controlar mundialmente y en forma total la producción y distribución de alimentos y productos farmacéuticos. Conjuntamente con el acceso al agua, estos bienes esenciales para la vida humana fueron hasta muy recientemente (se podría decir que hasta el advenimiento de la OMC) controlados por las comunidades, no por intereses corporativos.

La economía mundial ha entrado en una dinámica de auto reproducción perpetua alimentada por el imperativo de crecimiento de las empresas, que cada vez son menor en número pero cada vez mayores y controlan y concentran parcelas cada vez mayores de capital y mercados. La OMC se ha tornado en instrumento privilegiado para legitimar y fomentar tales intereses corporativos. Los acuerdos de comercio multilaterales, que se hacen respetar a través de las reglas de la OMC, están reformulando el orden económico mundial y la distribución mundial del trabajo para servir mejor a los intereses de lucro y su necesidad inherente de crecer... o morir.

preocupaciones éticas y destrucción de la biodiversidad

La verdadera esencia de toda estas maquinaciones poderosas no es aún bien conocida. Pero lo que si está cada vez más claro es la creciente investigación científica y el interés público por las amenazas que implica la introducción de OGMs en la agricultura y su liberación en el medio ambiente. Ellas abarcan desde las preocupaciones éticas hasta impactos potencialmente devastadores para biodiversidad, especialmente la biodiversidad agropecuaria, ya seriamente amenazada por las variedades de alto rendimiento de la Revolución Verde y todo su paquete tecnológico, del que los cultivos transgénicos son fieles herederos.



Percy Schmeiser demonstrates against corporate control of seeds. [iza kruszewska, anped]

riesgos ambientales y dependencia

Las amenazas al medio ambiente están bien documentadas e incluyen erosión genética, contaminación del medio ambiente a través del aumento de sustancias químicas, la contaminación de los cultivos convencionales con OGMs, el daño ocasionado por los OGMs en organismos beneficiosos, especies que se pierden por la expansión de monocultivos y el creciente uso de agua para cultivar variedades que no están adaptadas al medio. Las amenazas potenciales a la salud incluyen resistencia a los antibióticos, reacciones alérgicas, y una creciente desnutrición debida al cambio de los patrones dietéticos. Los agricultores enfrentan una dependencia creciente de las corporaciones que venden semillas transgénicas patentadas, más desplazamiento forzoso de sus campos y mayor concentración en la tenencia de la tierra. Otras amenazas socioeconómicas incluyen menor soberanía y seguridad alimentaria a través de una dependencia excesiva en sólo unas pocas variedades transgénicas y de alto rendimiento, erosión de la cultura y los medios de sustento de los custodios de la biodiversidad que desaparecen a medida que las variedades de semillas tradicionales se van perdiendo, y la biopiratería asociada a la prospección biológica para el desarrollo de la ingeniería genética.

resistencia local y propuestas positivas

De cara a estas amenazas, un creciente número de movimientos se está resistiendo a esta imposición corporativa en nuestros campos y nuestras vidas. La resistencia local toma muchas formas. Algunos han tomado medidas directamente para destruir las pruebas de campo de los cultivos transgénicos, como en la India, Indonesia y el Brasil por parte de miembros de la Vía Campesina. Las autoridades locales han prohibido a los OGMs, como en el Estado de Rio Grande do Sul en el sur de Brasil. Las coaliciones de la sociedad civil han luchado para que la legislación estableciera territorios "libres de OGMs", como en el caso de Nicaragua, o utilizan la acción judicial para impugnar las leyes que permiten el ingreso de OGMs, como en el caso de Indonesia. Organizaciones activas del ámbito local han tomado medidas para proteger, conservar y reproducir las variedades de semillas tradicionales locales, como es el caso del proyecto internacional "Cultivando Biodiversidad" auspiciado por GRAIN. Estas estrategias también son promovidas en los casos de Bolivia, Canadá, Ecuador, Indonesia, Nicaragua y Uruguay.

Los siete casos de estudio en esta publicación reflejan claramente muchas de las tensiones crecientes y los conflictos entre estos actores que defienden el interés público y los organismos internacionales y las empresas de biotecnología y el sector agroindustrial y alimentario que pretenden imponer el modelo de desarrollo agropecuario de la Revolución Verde y su nueva revolución genética. Los gobiernos nacionales --como el de EE.UU.-- abrazan abiertamente los intereses de esas empresas y los promueven en los organismos multilaterales, o finalmente claudican ante sus intolerables presiones, cediendo la soberanía de sus pueblos.

dominio y unilateralismo de EE.UU.

Por un motivo importante, el primer caso presenta a partidarios de la bioseguridad que se han resistido al dominio y el unilateralismo de EE.UU. Estados Unidos es una de las pocas naciones que se negaron a firmar el CDB. Sin ser parte de la CDB, EE.UU. ha dirigido desde afuera al así llamado "Grupo de Miami", una coalición de países completamente opuesta al Protocolo de Bioseguridad. Esta arrogancia de EE.UU. está ahora complementada y reforzada con intimidaciones y amenazas a través de sanciones comerciales unilaterales bajo la OMC. Su blanco son los países incluyendo a Sri Lanka, Bolivia y Croacia que adoptaron normas estrictas sobre OGMs y de seguridad alimentaria, y naciones asiáticas como China, Corea y Tailandia que planean presentar nuevas leyes sobre etiquetado de OGMs.

A pesar del apoyo público creciente, estos casos estudiados muestran cómo los gobiernos finalmente capitularon ante las intolerables amenazas de sanciones económicas de EE.UU., en lugar que respetar la voluntad soberana de su propia población y la opinión pública internacional. También revelan hasta qué punto el gobierno estadounidense teme y trata de invalidar los procesos democráticos y participativos de toma de decisiones en otros países, imponiendo en vez su dominio autoritario a través de amenazas económicas.

luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad | parte una

por alberto villarreal, redes/amigos de la tierra, uruguay

ayuda alimentaria inhumana en nicaragua

El caso de Nicaragua es revelador del cinismo con que actúa el gobierno de EE.UU. en su intento de imponerle los transgénicos a los países del Sur, utilizando a tales efectos los programas de ayuda alimentaria. Casos semejantes ya han sido notificados en Colombia, Ecuador y Bolivia.

Los desastres, emergencias y el hambre del Tercer Mundo son utilizados como oportunidades comerciales por las transnacionales de la alimentación y el gobierno de EE.UU., que ven en la mal llamada "ayuda alimentaria" su gran oportunidad para beneficiarse de un mercado no regulado. Lo que en realidad se debería denominar "intervención alimentaria" por atentar contra la soberanía alimentaria de los pueblos y favorecer la práctica del dumping de excedentes agropecuarios en perjuicio de la producción agrícola nacional, se oculta tras un disfraz humanitario. En efecto, la mal llamada ayuda alimentaria tiene un historial de destrucción sistemática de los sistemas autóctonos de producción alimentaria en los países del África que más han sufrido el hambre.

Si alguien todavía tiene dudas con respecto a la ética "humanitaria" que mueve al gobierno de EE.UU. y las transnacionales de la biotecnología, sin duda el caso de Nicaragua le servirá para despejárselas.

el poder de la verificación

Finalmente, el caso de Nicaragua ofrece además una importante herramienta de lucha, cual es la posibilidad de verificar certeramente la presencia de material transgénico con los mismos métodos que utilizan los entes reguladores en EE.UU. El acceso a esas herramientas de verificación puede volcar la balanza del debate (y la regulación) en torno a los transgénicos decididamente a favor de sus críticos, ya que las incertidumbres en torno a sus riesgos cobrarán mayor dramatismo toda vez que se compruebe que los OGMs se encuentran fuera de control.

bolivia y la defensa de los centros de origen de cultivos

El estudio de caso de Bolivia, así como el nicaraguense, se destaca porque describe un tema tan importante como son las campañas que pretenden proteger y mejorar las variedades locales tradicionales, en este caso la papa y el maíz en sus centros de origen. Recientemente se ha encontrado contaminación transgénica en unas variedades de maíz en Méjico, y en el mismo germoplasma de los bancos genéticos del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo). Como revela el caso nicaraguense, también es alta la probabilidad de contaminación genética del maíz en Nicaragua, otro de los centros de origen mesoamericano del maíz, amenazando la diversidad genética de las variedades locales criadas por los campesinos e indígenas de ese país. Estos descubrimientos confirman los temores que en definitiva movilizaron a los pueblos indígenas, agricultores y las organizaciones civiles bolivianos para oponerse a los planes de la Fundación Proinpa que quería hacer pruebas de campo con papa transgénica.

los riesgos de la privatización de la investigación científica

El caso boliviano, como el indonesio, también pone de manifiesto el involucramiento de las unidades de investigación de las universidades en el desarrollo de los OGMs, en ambos casos con papas Bt. Esas investigaciones a menudo están financiadas directamente por los gigantes de la genética. Esto ha generado creciente preocupación pública acerca de la privatización de la investigación y su consiguiente orientación hacia el lucro en lugar que hacia el bien común. Por ejemplo, la Universidad de Leeds de Inglaterra suministró el material transgénico que se pretendía probar en los campos de Bolivia, y la Universidad del Estado de Michigan, EE.UU. es uno de los tres institutos de investigación que proporciona las papas Bt que se están sometiendo a pruebas de campo en Indonesia.

trato preferencial para las transnacionales

Este estudio de caso también revela un déficit democrático enorme en la implementación de las estrategias nacionales de bioseguridad que vienen aplicándose a partir de las negociaciones del Protocolo de Bioseguridad. El control y la toma de decisiones sobre asuntos de bioseguridad, incluyendo la introducción de material transgénico, a menudo ocurre en comisiones nacionales de bioseguridad que no están abiertas a la participación de la sociedad civil. Sin embargo, los grupos de presión de la industria de biotecnología y las unidades de investigación de las grandes empresas agroindustriales sí son escuchados en esos entes reguladores. En esas condiciones, cualquier intento de conformidad con las metas mínimas del Protocolo de Bioseguridad incluyendo controles sobre el movimiento transfronterizo de material transgénico es fácilmente neutralizado en esas comisiones.

El tema de la democracia y la participación en la toma de decisiones es un tema recurrente en los estudios de caso. Como se verá, los gobiernos locales y nacionales en un principio son generalmente receptivos a la presión, los reclamos y las denuncias de las organizaciones ciudadanas, pero al final claudican ante las presiones bilaterales de gobiernos como el de EE.UU., de organismos multilaterales como la OMC o de empresas transnacionales como la Monsanto. Pero también hay casos, como el uruguayo y el indonesio, en los que las autoridades nacionales hacen oídos sordos a los reclamos de su población desde un principio, sin necesidad de presiones externas. No es casual que se trate en ambos casos de gobiernos que no han saldado cuentas con un pasado reciente de feroces dictaduras militares.

la imposición del neoliberalismo

En efecto, las políticas neoliberales de apertura indiscriminada de los mercados nacionales a la competencia internacional, que constituyen el verdadero trasfondo del caso de la desaparición de variedades localmente adaptadas de frijól blanco en el Uruguay, fueron inicialmente adoptadas unilateralmente por el régimen militar que gobernó a ese país entre 1973 y 1985, aun antes que la Ronda Uruguay del GATT impusiera sólo algunos años después el Acuerdo Agrícola que ahora rige bajo la OMC. Tanto en este caso como en el de la privatización del agua de riego en Ecuador, las presiones más directas vinieron del Banco Mundial y el FMI. Estos organismos impusieron las privatizaciones y el modelo de desarrollo agropecuario de la Revolución Verde, basado en la apertura de los mercados (de los países del Sur) y una clara preferencia por los monocultivos para la exportación fundada en la doctrina neoliberal de supuestas ventajas comparativas, como condiciones a sus créditos y planes de salvataje financiero.

luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad | parte una

por alberto villarreal, redes/amigos de la tierra, uruguay

impactos de la liberalización de los mercados agropecuarios en uruguay

El caso de Uruguay es paradigmático, ya que ilustra trágicamente las falacias de esa doctrina y los graves perjuicios que acarrea la liberalización de los mercados agropecuarios impuesta por el Acuerdo Agrícola de la OMC, incluso para uno de los -otrora--exportadores netos de productos agropecuarios. De un lado, deja en evidencia que la aplicación de esas políticas neoliberales de apertura de los mercados y rebaja de aranceles, especialmente a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Agrícola de la OMC, transforma a países del Sur que antes eran autodependientes alimentariamente o incluso agroexportadores netos como el Uruguay, en importadores de alimentos cuyo cultivo y producción estaba perfectamente adaptado a las condiciones ambientales y sociales del país. De ese modo Uruguay pasa a importar el 85% de los frijoles que se consumen en el país, así como gran parte de las verduras, frutas, hortalizas y productos de chacra. Aun hoy, en medio de una crisis económica sin precedentes, cuando las exportaciones y las importaciones han caído en porcentajes que rondan el 20-30%, el rubro de importaciones de productos del reino vegetal se incrementó en un 33%, comparado con las cifras de seis meses atrás, cuando la debacle de la economía argentina comenzó a afectar seriamente al Uruguay.

invasión de los mercados domésticos

De otra parte, la consiguiente invasión del mercado nacional con productos agropecuarios de menor precio (en este caso, frijoles subsidiados de EE.UU., y otros de menor calidad procedentes de Perú y Myanmar), empuja hacia abajo los precios de la producción nacional, llevando al abandono del cultivo en cuestión por los agricultores por falta de rentabilidad, o a la quiebra cuando la situación se generaliza a otros rubros. Desaparece así entonces, en el caso del frijol en Uruguay, no sólo un sistema de producción sustentable caracterizado por la no dependencia en insumos externos, la baja inversión de capital y el uso de variedades (semillas) adaptadas a los agroecosistemas locales, sino que además desaparecen los pequeños productores familiares que podían mantener la biodiversidad de los cultivos y conservar los recursos naturales con sus prácticas agropecuarias de bajo impacto. La lógica de esas políticas y esos procesos lleva a la concentración de la tierra en menos manos cada vez y a la especialización en una cantidad de rubros y variedades cada vez más reducidos cuyos insumos son propiedad de grandes empresas transnacionales, y cuyo destino es la exportación. En todo caso, queda visto que a lo largo de toda la cadena de producción y consumo agropecuario, los principales beneficiarios de esas políticas son invariablemente las grandes empresas transnacionales, ya sea como importadores de alimentos que antes se producían localmente, como proveedores de semillas e insumos químicos e industriales para la agricultura empresarial e industrializada de la Revolución Verde, como exportadores de esas producciones, o como importadores o compradores de insumos agropecuarios de bajo precio para la industria procesadora de alimentos, raciones animales y fibras industriales (como en el caso del algodón Bt para la inmensa industria textil de Indonesia).

la hipocresía de los subsidios

El caso de Uruguay, finalmente, pone de relieve un hecho que desmiente y deja al descubierto algunas de las verdades sagradas del credo de la liberalización de los mercados. A los productores en el Sur se les niega protección y subsidios porque tales medidas "distorsionan el comercio", según les dicen. No obstante, además de verse obligados a tolerar los enormes subsidios agropecuarios del Norte (80% de los cuales favorecen a los grandes productores industrializados y las agroindustrias), ahora también deben soportar que existen ciertas actividades agrícolas altamente subsidiadas también en el Sur, especialmente las plantaciones madereras. Tal es el caso de Uruguay, cuyas mayores plantaciones se encuentran en manos de grandes empresas transnacionales (Weyerhaeuser, Shell y la española Ence), que constituyen los propietarios más grandes de tierras en el país. Cuando incide incluso en la formulación de políticas nacionales, esta hipocresía en torno a los subsidios ha tenido el efecto de abrirle los ojos a muchos agricultores que hasta hace poco eran fieles seguidores de la doctrina neoliberal.

amenazas del gats

El caso de la privatización del agua de riego en Ecuador nos permite ver algunos de los gravísimos impactos que puede acarrear la liberalización (y privatización) de los servicios que actualmente se está negociando en la OMC bajo el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (GATS, por su sigla en inglés), donde el agua constituye uno de los mercados que genera mayores ganancias, actualmente evaluado en más de U\$S 2,000 millones. Otros de los servicios que se encuentran en la mira de esas negociaciones y cuya eventual liberalización implica serias amenazas para la biodiversidad son los servicios de energía, turismo y los denominados servicios ambientales. Pero también nos recuerda y pone de relieve la altísima conflictividad social que pueden potencialmente generar esos procesos si la liberalización y privatización de los servicios públicos avanza en la OMC. Los recientes levantamientos populares que frenaron las privatizaciones de los servicios de agua y energía eléctrica en Cochabamba (Bolivia) y Ayacucho (Perú) respectivamente, dan evidencia de la evolución potencial de esa conflictividad latente. Esas movilizaciones populares, al igual que los campesinos ecuatorianos que perderán sus tierras como consecuencia directa de la privatización del agua de riego, reivindican el acceso al agua (y la energía eléctrica) como un derecho, no como un servicio sujeto al lucro y las leyes del mercado. La liberalización y privatización del agua despojará a las comunidades indígenas y los campesinos de sus derechos tradicionales sobre el agua, tornando el riego accesible únicamente para los grandes inversionistas nacionales y las transnacionales agroalimentarias.

Inundando la fertilidad en Ecuador

Además del impacto indirecto que supondrá el asentamiento de grandes empresarios agrícolas dedicados a una agricultura orientada a la exportación y armados con las tecnologías de la Revolución Verde, el propio embalse que se construirá para suministrarle agua de riego implicará un impacto enorme sobre la biodiversidad local. Ese embalse inundará de manera permanente un valle de 2,400 hectáreas reconocido localmente como uno de los más verdes y fértiles de una zona que se caracteriza por ser seca, distante 40 kms de la ciudad portuaria de Guayaquil. Además, cabe señalar el riesgo potencial que implica el riego excesivo, que puede hasta llegar a provocar procesos de desertización y pérdida de biodiversidad en la región.

tenencia de la tierra y conservación de la biodiversidad

Otro aspecto importante digno de resaltar en este caso es la problemática de la tenencia de la tierra, presente en muchas de las luchas locales contra el poder corporativo y la conservación de la biodiversidad. Fundamentalmente, que en casos de litigios ante la ley, los dueños ancestrales de las tierras muchas veces corren en desventaja debido a que no poseen títulos de propiedad sobre ellas, y por lo tanto no tienen ninguna forma legal de hacer valer sus derechos ni recibir indemnización alguna.

luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad | parte una

por alberto villarreal, redes/amigos de la tierra, uruguay

mitos genéticos en Indonesia

El caso del algodón Bt en Indonesia desmiente algunos de los mitos de los que se ha servido la industria de la biotecnología para promocionar las bondades de los transgénicos en la agricultura. Por una parte, deja en evidencia el hecho que la investigación en biotecnología agropecuaria no sólo está orientada hacia cultivos alimentarios, sino que abarca también cultivos que son de uso industrial como el algodón. De hecho, contrariamente a lo que sostiene la maquinaria publicitaria de sus promotores, que la presenta como la solución a la problemática del hambre en el mundo, la investigación y desarrollo en biotecnología agrícola está centrada fundamentalmente en cultivos para alimentación animal, plantas ornamentales y otros cultivos no alimentarios e industriales como el tabaco y el algodón, no en cultivos para consumo humano.

De otra parte, desmiente la pretendida productividad, rendimiento y conveniencia ambiental y económica de los cultivos transgénicos. El caso denuncia el hecho que el algodón transgénico no necesariamente es el mejor tipo de semilla para los productores de algodón, puesto que no actúa sobre una de las plagas principales que atacan ese cultivo en la zona de experimentación, lo que implica que aún será necesario aplicar grandes cantidades de plaguicidas para proteger al cultivo. Ya en las pruebas de campo quedó ese hecho en evidencia, habiendo sucumbido a la sequía y las plagas de insectos. Además, la semilla de algodón transgénico es cinco veces más costosa que otras semillas mejoradas en el país, que dan el mismo rendimiento de 2-3 toneladas que supuestamente da el algodón Bt de Monsanto. Aun cuando el rendimiento real del algodón Bt en las pruebas de campo es motivo de controversia, todos están de acuerdo que fue más bajo que lo esperado. El gobierno incluso llegó a revelar que más del 70% de las pruebas de campo con algodón Bt habían dado rendimientos inferiores a los esperados, al tiempo que algunos productores denunciaban rendimientos de apenas 500 kilogramos por hectárea, en lugar de las 3 toneladas anunciadas por Monsanto.

derechos de los agricultores y contaminación genética en Canadá

El sonado caso del pleito del agricultor canadiense Percy Schmeiser con Monsanto resume las amenazas que supone la introducción de cultivos transgénicos patentados para los agricultores. Las normas sobre propiedad intelectual de la OMC y los contratos impuestos a los agricultores por los gigantes de la genética como Monsanto, amenazan hoy el derecho fundamental de los agricultores de todo el mundo a cuidar, usar e intercambiar sus propias semillas.

Este caso confirma los riesgos de contaminación genética de cultivos convencionales con rasgos indeseables de cultivos transgénicos. También destaca el choque creciente entre los esfuerzos de los agricultores ecológicos/orgánicos por orientar la agricultura hacia la sustentabilidad ambiental y las metas de los gigantes de la genética, que operan en sentido contrario. Esta oposición creciente se expresa tanto en la arena política como en los campos, donde la contaminación genética está haciendo que la agricultura ecológica/orgánica y sustentable sea imposible de practicar. El hecho que Schmeiser sea todo menos la imagen del luchador contra la globalización del capital con que Monsanto a menudo quiere descalificar a sus críticos, es revelador de la naturaleza y el alcance del creciente conflicto.

desafiar la premisa de crecer o morir

Lograr una conservación duradera de la biodiversidad, y bioseguridad en los ámbitos locales, nacionales y global requerirá mucho más que la resistencia local presentada en esta publicación. También requerirá mucho más que la ratificación de un Protocolo de Bioseguridad bastante aguado. Más bien, requerirá desafiar fundamentalmente y cambiar el modelo actual de desarrollo basado en el afán de lucro y el imperativo de crecer-o-morir. Requerirá reformar radicalmente o desmantelar la OMC y su Acuerdo Agrícola y otros de sus acuerdos que definen la orientación de la agricultura, tales como el Acuerdo TRIPS sobre derechos de propiedad intelectual y patentes, el acuerdo BTC sobre barreras técnicas al comercio, el acuerdo MSF sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (y la aplicación del principio precautorio).

reconocer la deuda ecológica

Requerirá el reconocimiento de la deuda ecológica del Norte con el Sur y la anulación de las ilegítimas deudas financieras de los países del Sur, que los obligan a orientar su producción agropecuaria a la exportación. Requerirá cambios radicales en los términos de intercambio que actualmente son absolutamente desfavorables para los países del Sur, tanto desde el punto de vistas financiero como desde el punto de vista ambiental. Requerirá la reforma radical o el desmatelamiento de las políticas de desarrollo rural del Banco Mundial, y las políticas conjuntas de éste y el FMI orientadas a la reducción de la pobreza en el mundo, que no hacen otra cosa que apuntalar el modelo de desarrollo agropecuario de la Revolución Verde que ya ha probado ser desastroso para la biodiversidad y sus criadores. En fin, requerirá generar las condiciones políticas, económicas e institucionales adecuadas para que la bioseguridad y la conservación de la biodiversidad sean una realidad viviente, cuidada tanto por las comunidades locales como por los actores económicos y las autoridades gubernamentales.

el derecho a elegir

Sin embargo, estos casos sí revelan el verdadero alcance y lo que está en juego en esta lucha. Muestran como los agricultores y ciudadanos están luchando contra las tentativas corporativas de control total sobre nuestros sistemas alimentarios y de salud a través de los OGMs y las patentes sobre seres vivos. Se están levantando en todo el mundo para "proteger sus derechos y elegir la tecnología que usan, los cultivos que siembran y las semillas que guardan" para alimentar y curarse a sí mismos y a la comunidad, como señala Schmeiser.

luchas locales y amenazas de la agricultura corporativa para la soberanía alimentaria y la biodiversidad | parte una

por alberto villarreal, redes/amigos de la tierra, uruguay

¿por qué los acuerdos de comercio global son motivo de tanta preocupación para las luchas locales?

Los OGMs no están aún siendo negociados bajo la OMC, pero varios de los acuerdos de la OMC claramente indican otra realidad, impuesta por los grupos de presión de los gigantes de la genética. Uno de ellos es el acuerdo ADPIC, mejor conocido como TRIPS (por su sigla en inglés), sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que regula las normas sobre patentes y otras formas "sui generis" de protección de la propiedad intelectual sobre microorganismos y los OGMs. Otro es el acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, conocido como TBT por su sigla en inglés, que examina el etiquetado obligatorio de productos (genéticamente modificados). Aún otro más es el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, conocido como SPS por su sigla en inglés, donde la aplicación del principio precautorio está fuertemente criticado y en la mira de los intereses corporativos.

De forma parecida, el Acuerdo sobre Agricultura, conocido como AoA por su sigla en inglés, indirectamente prepara el terreno para la introducción (obligatoria) generalizada de los cultivos transgénicos en las comunidades agrarias, los mercados mundiales y nuestros sistemas alimentarios. El AoA promueve activamente y apoya la agricultura industrial de gran escala, monocultivos y alta inversión orientada hacia la exportación, típica de la "Revolución Verde", liderada por los mismísimos actores agroindustriales (Syngenta, Pharmacia, Aventis, BASF, Dupont, Bayer y Dow) que también constituyen el núcleo central de partidarios impulsores de los OGMs. La "Revolución Genética" en la agricultura es el nuevo producto de quienes antes nos habían ya traído la Revolución Verde.

El Acuerdo de Agricultura de la OMC, junto al de Barreras Técnicas al Comercio y el de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, constituye una herramienta fundamental de las grandes transnacionales de la alimentación para imponer sus productos en los mercados locales del Tercer Mundo a precios por debajo de los costos de producción, destruyendo la producción campesina y familiar, base de la soberanía alimentaria, transformando a los alimentos en una mercancía más destinada a generar lucro.

Se debe prestar también mucha atención a los intentos a menudo exitosos de la OMC por influir en favor de dichas corporaciones las decisiones de otros organismos y acuerdos multilaterales. Tal es el caso de su influencia sobre la FAO y el CDB, donde las referencias críticas a los OGMs sirven sólo para legitimar su aceptación general de los cultivos transgénicos como la solución agrícola "sustentable" para el problema del hambre en el mundo. El hecho que el Protocolo de Bioseguridad haya sido sustancialmente diluido revela la fuerza de los grupos de presión de la industria de la ingeniería genética, especialmente aquella de EE.UU.

resistiendo al unilateralismo: defensores de la bioseguridad versus ee.uu. | parte dos

por juan lopez, amigos de la tierra europa

política de ee.uu. sobre bioseguridad: un caso de unilateralismo

EE.UU. y las empresas de biotecnología están aumentando la presión para expandir la penetración de los organismos genéticamente modificados (OGMs) a los mercados en todo el mundo, no importando los impactos potenciales sobre la salud y la biodiversidad. Cada vez más, la amenaza de acciones punitivas a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es usada para debilitar las moratorias a los OGMs y los requisitos de etiquetado. Afortunadamente, también está creciendo la resistencia a esas amenazas.

En estos últimos meses, la administración de Washington ha aumentado la presión sobre cualquier país que pretenda adoptar normas estrictas sobre OGMs, considerando tales medidas como barreras para el comercio. Documentos filtrados de los gobiernos de EE.UU. y Argentina obtenidos por Amigos de la Tierra Internacional revelan el grado de presión que EE.UU. y las compañías de biotecnología emplean sobre los países como Croacia y Bolivia, que intentaban adoptar reglas estrictas sobre OGMs. De forma similar, también aplica enormes presiones sobre países asiáticos como la China, Corea y Tailandia, que tienen planes de introducir nuevas leyes de etiquetado para los OGMs. El año pasado, las amenazas de acción de EE.UU. en la OMC contra Sri Lanka hicieron que este país renunciara a legislar normas de prohibición de los OGMs que ya habían sido propuestas y que debían ser implementadas a partir de septiembre del 2001. En este momento la Unión Europea (UE) enfrenta presiones similares.

La política de EE.UU. sobre bioseguridad se caracteriza por su unilateralismo y un notorio desinterés por las preocupaciones e intereses legítimos de otros países. EE.UU. está entre las pocas naciones que se negaron a firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). También se opuso al Protocolo de Bioseguridad, que se negoció bajo los auspicios del CDB y fue aprobado en enero del 2000.

Los países en vías de desarrollo han expresado fuertemente la necesidad de un Protocolo de Bioseguridad. Estas naciones personifican la incapacidad de ocuparse de los riesgos planteados por los OGMs a la diversidad biológica y a la salud humana. La mayoría de tales países sostienen que la escasez de marcos regulatorios para la bioseguridad plantea riesgos inaceptables, tornando insostenibles las pruebas de campo y los cultivos transgénicos que liberan OGMs en el medio ambiente. Estas preocupaciones fueron expuestas en el Protocolo hace años, y desafortunadamente fueron proféticas en lo que hace a la contaminación genética en los campos de cultivo en todo el mundo: variedades de maíz transgénico no aprobadas para el consumo humano fueron descubiertas en productos alimenticios en EE.UU.; la contaminación de cultivos convencionales con cultivos de colza transgénica en Canadá; contaminación transgénica de variedades autóctonas de maíz en su centro de origen en Méjico; y algodón transgénico ilegal en Grecia e India.

El Protocolo reconoce que los OGMs son diferentes de los organismos convencionales no transgénicos y, por lo tanto, que requieren un tratamiento diferenciado. El Protocolo establece límites a los movimientos internacionales de OGMs y pone énfasis en el principio precautorio en el campo de la bioseguridad.

No obstante, EE.UU. y las multinacionales de la biotecnología siguen juzgando las medidas de bioseguridad, incluyendo muchas diseñadas para conservar la biodiversidad, como restrictivas del comercio y por lo tanto inaceptables y "proteccionistas". Estados Unidos es el mayor promotor de las biotecnologías modernas y tiene intereses económicos enorme en ese sector. Como tal, EE.UU. juzga que los OGMs son buenos y seguros, y que las incertidumbres y los impactos potencialmente dañinos no son justificación suficiente para restringir su comercialización.

Sin embargo, otros países se han tomado en serio los riesgos que suponen los OGMs para el medio ambiente y la salud. Tal es el caso de la Unión Europea (UE), Sri Lanka y Croacia, cuyos ejemplos serán discutidos más adelante. Bolivia, otro caso importante al respecto, será descrito en detalle en el siguiente capítulo.

resistiendo al unilateralismo: defensores de la bioseguridad versus ee.uu. | parte dos

por juan lopez, amigos de la tierra europa

la unión europea se mantiene firme

En junio de 1999 la Unión Europea adoptó una moratoria de facto sobre cualquier nueva autorización de comercialización de OGMs; desde 1998 hasta la fecha no se han aprobado nuevos OGMs en la Unión Europea. De manera preventiva y aplicando el principio precautorio, cinco Estados miembros -Dinamarca, Grecia, Francia, Italia y Luxemburgo- resolvieron suspender toda nueva autorización para el cultivo o comercialización de OGMs, hasta que se establezca un mejor marco regulatorio sobre la liberación de OGMs en el ambiente, que incluya normas de etiquetado y trazabilidad.

Estados Unidos se opone enérgicamente a esa moratoria. Alan Larson, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Agropecuarios afirmó en diciembre del 2001 que él “no estaba preparado para aceptar la premisa de que no habrá nuevas autorizaciones por dos años más”. Crecen las especulaciones con respecto a que EE.UU. entablará una disputa comercial contra la Unión Europea en el futuro.

Estados Unidos actualmente está tratando de socavar la legislación propuesta por la Unión Europea sobre etiquetado y trazabilidad, según revelan los comentarios de EE.UU. en la OMC. EE.UU. está cuestionando los procesos democráticos encargados de la toma de decisiones respecto a la autorización de OGMs en la Unión Europea. Los comentarios de EE.UU. identifican como el “problema central que enfrenta la Unión Europea en biotecnología” el hecho que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la última palabra en el proceso de autorización. Las autoridades estadounidenses consideran que las propuestas recientes de la UE no estudian este “problema” y se quejan que “las decisiones seguirán tomándose a través de procesos políticos” y por lo tanto “los Estados

miembros individuales continuarán pudiendo retener los procesos de autorización haciéndolos rehenes de consideraciones políticas.”

A pesar de estas presiones la Unión Europea parece mantenerse firme en su postura, decidida a implementar el marco legal sobre OGMs que EE.UU. tanto se empeña en socavar.

sri lanka

A comienzos del 2001, el gobierno de Sri Lanka redactó una ley que prohibiría los OGMs. La ley apuntaba a proteger a la gente de Sri Lanka de impactos potenciales y no estudiados de los OGMs.

EE.UU. se opuso inmediatamente a la prohibición propuesta. El asesor de agricultura de la embajada de EE.UU. en la India amenazó con denunciar la prohibición ante la OMC, movida ésta que podría haberle costado a Sri Lanka U\$S 190 millones de multa si no levantaba la prohibición.

Las ONGs de Sri Lanka lanzaron una campaña para instar a su gobierno a resistir a esta amenaza. Más de 200 grupos de consumidores, de agricultores y organizaciones ecologistas de todo el mundo se sumaron a la campaña de protesta contra el enjuiciamiento de la administración Bush a las leyes de Sri Lanka sobre seguridad de los alimentos. Desafortunadamente, debido a la presión de EE.UU. y de Australia, la ley sobre alimentos que debía entrar en vigor en septiembre del 2001 fue aplazada indefinidamente.

“Sri Lanka es vulnerable pues no tiene legislación sobre bioseguridad, y la presión y amenazas de los importadores en el sentido que ellos pararán de comprar su té son desastrosas”.

Hermantha Withanage - Environmental Foundation Ltd / Amigos de la Tierra Sri Lanka.

croacia protege sus derechos

En 2001, Croacia preparó un proyecto de ley para adoptar una moratoria sobre los OGMs. En junio de ese año, cuatro ministerios de Croacia acordaron el texto de una ley para prohibir los OGMs y sus subproductos hasta que se establezca un marco regulatorio más específico. La prohibición fue propuesta en virtud de los posibles impactos negativos de los OGMs sobre el medio ambiente y la salud en Croacia.

Desde septiembre del 2001, Croacia ha sido objeto de presiones constantes de parte de EE.UU. para que renuncie al proyecto de ley. En un memorándum fechado el 28 de noviembre y dirigido al Ministerio de Medio Ambiente por la embajada de EE.UU. en Zagreb, las autoridades estadounidenses antepusieron sus intereses comerciales a la protección del medio ambiente al afirmar que “si se implementa una prohibición así, el gobierno estadounidense deberá considerar reclamar sus derechos en la OMC”. El 10 de diciembre de 2001, grupos ecologistas denunciaron esta maniobra de EE.UU. durante una Mesa Redonda sobre Bioseguridad organizada por el Ministerio del Medio Ambiente croata en Zagreb.

El memorándum arriba mencionado de la embajada de EE.UU. también sostiene que los productos alimenticios transgénicos “han demostrado ser tan seguros en EE.UU. y en todos lados como los productos alimenticios convencionales”. Sin embargo, en respuesta a ese memorándum, grupos de EE.UU. sostuvieron en una carta abierta al ministro croata de medio ambiente que el marco regulatorio de EE.UU. y sus políticas de monitoreo son inadecuadas para concluir en este momento que los OGMs son seguros.

“Es indignante que EE.UU. se entrometa en nuestra elaboración de políticas imponiendo sus prioridades comerciales sobre nuestros esfuerzos de protección del medio ambiente y la salud. Los países de la Unión Europea adoptaron una moratoria sobre los OGMs. No veo la razón por la cual Croacia debería se impedida de implementar medidas similares”.

*Damjan Bogdanovic - Green Action /
Amigos de la Tierra Croacia*

Resuelto frente a las presiones de EE.UU., el ministro croata de medio ambiente Bozo Kovacevic, afirmó que Croacia redactará una legislación para prohibir la producción y para limitar la importación de alimentos que contengan OGMs. Según Kovacevic, “el Gobierno de EE.UU. está presionando por los intereses de las compañías estadounidenses, y ese es su derecho. Nuestro deber es proteger nuestros intereses y seguir la legislación de la Unión Europea.”

la omc como instrumento para imponer los OGMs

En marzo del 2002, el presidente de EE.UU. George Bush anunció públicamente sus intención de imponer tarifas protectoras hasta de un 30% para el acero importado de ciertos países. Estados Unidos justificó esa medida como una forma de proteger su industria nacional de acero mientras se reorganizaba y mejoraba su competitividad a nivel internacional.

Esta notoria contradicción entre la política de EE.UU. sobre bioseguridad y acero muestra que el gobierno de ese país no está dispuesto a respetar el mismo dogma de “mercado libre” que está promoviendo tan enérgicamente a nivel mundial. EE.UU. juzga la legislación de bioseguridad adoptada por otros países como proteccionismo comercial injustificado, pero al mismo tiempo considera que sus propias medidas proteccionistas para su acero son justificadas. Esas contradicciones aparentes en la política de EE.UU. son un claro reflejo de su unilateralismo: el proteccionismo comercial es malo, excepto cuando es para proteger los intereses de EE.UU.

Los casos recién expuestos revelan a la OMC como un instrumento usado por el gobierno de EE.UU. y las empresas de biotecnología para imponer la aceptación de los OGMs en todo el mundo. Ponen de manifiesto que la oposición de EE.UU. al establecimiento de normas sobre OGMs constituye un intento unilateral para proteger sus propios intereses a costa de la preocupación de otras naciones por la protección del medio ambiente y la salud. Esta interferencia respaldada en la OMC impone las prioridades comerciales de EE.UU. por encima de las prioridades ambientales y sanitarias de otras naciones, y eso es indefendible.

Bibliografía: Por más información sobre los documentos mencionados en este estudio de caso, visite www.foei.org



resistencia contra los ogms en la ayuda alimentaria: el caso de la ayuda alimentaria transgénica en nicaragua | parte tres

por julio sánchez, centro humboldt/amigos de la tierra nicaragüa

nicaragua: un país empobrecido

Nicaragua es un país empobrecido y colocado en una situación desventajosa dentro del nuevo orden mundial, marcado por la globalización y la imposición de reglas dictadas por los organismos multilaterales y la Organización Mundial de Comercio, principal garante del capital transnacional. Actualmente nuestro país atraviesa una profunda crisis en la agricultura campesina e indígena, producto de las medidas económicas impuestas por los organismos financieros internacionales, los desastres climáticos, la casi nula asistencia y financiamiento a los pequeños y medianos productores, la pérdida de la biodiversidad (variedades criollas) y el abandono de nuestra identidad cultural.

la incertidumbre transgénica y el principio de precaución

Todo ser humano tiene derecho a la alimentación y al acceso a un alimento sano y nutritivo. Asimismo, los países y los pueblos, tienen derecho de mantener su soberanía alimentaria, es decir, a decidir cómo alimentarse, dentro de sus patrones culturales, ejerciendo control en todo el proceso productivo.

Los impactos de los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGMs) en el medio ambiente y en la salud son parte de un amplio debate que la comunidad científica no ha saldado en lo que hace a su seguridad o inocuidad; sin embargo, existen numerosos estudios que muestran los riesgos potenciales que representan los transgénicos para el medio ambiente y la salud, además de impactos negativos a nivel socioeconómico.

El hecho que todavía se encuentren abiertos los debates científicos frente al peligro de graves daños irreversibles a causa de los transgénicos, no justifica que el Estado nicaraguense deba permitir la libre entrada de transgénicos y no tome medidas eficaces para impedir los impactos negativos en el medio ambiente, la salud o socioeconómicos en virtud del principio de precaución. A esto se añade que Nicaragua no tiene ningún marco legislativo que regule la introducción de transgénicos en el medio ambiente o en la cadena alimentaria humana, y menos aún dispone de capacidad técnica, financiera, política e infraestructura en bioseguridad que de respuesta a las consecuencias que acarrearía la aceptación de esta tecnología. El debate que rodea los transgénicos y el hecho que los posibles efectos adversos que estos puedan causar sean irreversibles, alarmó a diversos sectores de la sociedad civil en Nicaragua que se plantearon como reprochable e inadmisible la presencia de transgénicos en el país, en virtud de su preocupación por la soberanía alimentaria, la protección y conservación de los recursos naturales, así como el desarrollo económico del país.

la importancia de la biodiversidad agrícola nicaragüense y la necesidad de proteger la semilla criolla

La agricultura nicaragüense estaría asimismo amenazada por la introducción de productos transgénicos especialmente maíz, puesto que en Nicaragua las comunidades campesinas han realizado un trabajo ancestral en la crianza y mejoramiento de sus semillas mediante técnicas tradicionales, que estarían en peligro de ser desplazadas. La introducción de transgénicos y la contaminación genética de los cultivos nicaragüenses representa riesgos claros para los agricultores y el modelo de producción agrícola nacional. Se podría acelerar la pérdida de variedades criollas, pues conlleva a que unas pocas variedades transgénicas podrían reemplazar las variedades nativas o tradicionales seleccionadas por los propios agricultores, con impactos irreversibles. Es decir, que siendo Nicaragua centro de origen de maíz, queda expuesta a perder todas sus variedades nativas o criollas, con efectos catastróficos para los agricultores y la soberanía alimentaria del país, que lo sumiría en una situación agrícola dirigida hacia el monocultivo y el monopolio de los sistemas de producción por parte de transnacionales, cuyos impactos negativos son bien conocidos por el pueblo nicaraguense, como en el caso del café y el algodón.

En México, también centro de origen de maíz, a pesar de la existencia de una moratoria contra los transgénicos, la revista científica Nature reveló en octubre del 2001 la existencia de casos de contaminación del germoplasma nativo por la presencia de cultivos transgénicos introducidos por las transnacionales biotecnológicas. Nicaragua es centro de origen del maíz, y por eso los descubrimientos de México revelan los riesgos a los que se enfrenta el maíz en su centro de origen en Mesoamérica.

la necesidad de identificar la presencia de transgénicos en nicaragua

Ante los riesgos potenciales que los transgénicos presentan, se reveló necesario conocer en primer lugar si efectivamente había transgénicos en Nicaragua. Durante la década de los 90, el Centro Humboldt/ Amigos de la Tierra Nicaragua en conjunto con otros sectores como consumidores, productores, defensores de derechos humanos, movimientos indígenas, entre otros, abrió espacios de debate por medio de campañas de información y capacitación sobre el tema; sin embargo, no se sabía con certeza si la existencia de transgénicos en Nicaragua era un hecho.

En esta situación, y considerando el contexto internacional y los impactos que la introducción de transgénicos presentaría para Nicaragua, organizaciones de la sociedad civil nicaraguense se dieron cuenta que era necesario identificar si efectivamente había transgénicos. En consecuencia, se decidió comenzar labores de monitoreo a fin de identificar la presencia de transgénicos, en coordinación con gobiernos locales y grupos de productores que compartían junto a nosotros las preocupaciones por los impactos de los OGMs en Nicaragua.

Esta actividad estuvo acompañada con acciones de índole política, entre las que figuró la solicitud presentada al gobierno nacional para que diera una posición oficial en contra de los OGMs. El ejecutivo respondió emitiendo una comunicación en la cual orientó a los Ministros a estudiar las consideraciones planteadas e incluirlas en los planes de acción nacional.

resistencia contra los ogms en la ayuda alimentaria: el caso de la ayuda alimentaria transgénica en nicaragua | parte tres

por julio sánchez, centro humboldt/amigos de la tierra nicaragüa

actividades de monitoreo

El monitoreo realizado se orientó en dos direcciones: cereales para ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dirigidos a programas de Mujeres Embarazadas, Niños de Preescolar y Alimento por Trabajo, destinados a los municipios de El Sauce y Achuapa pertenecientes al departamento de León, y los municipios Mozonte y Apali del departamento de Nueva Segovia.

El segundo enfoque fue sobre los cultivos de experimentación y/o validación en las comunidades de San Bartolo (Quilalí) y El Arenal (Nueva Segovia), promovidos por el Programa de Mejoramiento de semillas de la USAID-PROMESA, y abastecidos con semillas de maíz de MONSANTO, CARGILL y DEKALBRIEN.

Después de recolectar las muestras en Nicaragua, el Centro Humboldt/Amigos de la Tierra Nicaragua les aplicó un Análisis de Detección de Flujo Lateral a las muestras de Ayuda Alimentaria y Parcelas de Experimentación. En Estados Unidos, el Servicio Federal de Inspección de Granos (Federal Grain Inspection Service - FGIS) utiliza el método de la tira de detección a flujo lateral como Criterio Oficial reconocido por la Oficina de Normalización de Granos de Estados Unidos (United States Grain Standards Act - USGSA) para analizar el maíz, con resultados que dan una alta probabilidad de identificación de la presencia de eventos OGMs.

Posteriormente a los análisis preliminares, se enviaron muestras al laboratorio Genetic ID reconocido internacionalmente como autoridad en análisis genético, con dirección en el estado de Iowa, Estados Unidos.

las sospechas se confirman: transgénicos en nicaragua

De las muestras enviadas al laboratorio Genetic ID, las de cereales provenientes de la ayuda alimentaria salieron Positivas, indicando claramente la presencia de maíz transgénico en la ayuda alimentaria que ingresa al país; de igual forma se determinó la presencia de Roundop Ready, un OGM no autorizado en la Unión Europea.

En las muestras de cultivos de experimentación, las pruebas indicaron asimismo que existía la posibilidad de contenido transgénico en el límite de detección. Tras estos resultados ya no quedaba duda que la presencia de transgénicos en Nicaragua era una realidad.

El resultado del muestreo revela que el 67% de las muestras efectuadas de ayuda alimentaria fueron claramente positivas y 33% de cultivos experimentales dejaron abierta la posibilidad de existencia de contaminación genética en el límite de detección, lo cual abre la pregunta sobre la posibilidad que otro país centro de origen del maíz este contaminado genéticamente. Esta situación exige que el gobierno nicaragüense tome serias cartas en el asunto e inicie un monitoreo riguroso y exhaustivo en laboratorios independientes con el fin de verificar si existen semillas de maíz contaminadas genéticamente en el campo.

resistencia a los transgénicos: la formación de un alianza por una nicaragua libre de transgénicos

Las informaciones recibidas por canales internacionales sobre la posible presencia de transgénicos en la ayuda alimentaria, así como en las semillas, despertó la inquietud de diversos sectores de la sociedad civil nicaragüense. Así, desde el 2000 se aceleraron las actividades de información sobre este tema, dando diversos seminarios a comunidades de campesinos en Nicaragua, así como en los medios de comunicación.

A la luz de los alarmantes acontecimientos, las organizaciones que durante varios años habíamos llevado el tema a espacios de debate, unificamos fuerzas mediante la conformación de una alianza compuesta por 7 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, diversas entre sí, pero que juntas constituían un bloque de trabajo integral compuesto por grupos de derechos humanos, salud, ambientalistas, consumidores y trabajadores de la alimentación. Esta coalición se denominó Alianza por una Nicaragua Libre de Transgénicos.



Tras haber analizado los resultados del monitoreo, el 24 de mayo del 2002 se denunció públicamente la presencia de transgénicos en una Conferencia de Prensa internacional que contó con la participación de organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra Internacional, Consumidores Internacionales y Greenpeace México, quienes explicaron sus experiencias con los transgénicos en otras partes del mundo. Posteriormente, la Alianza llevó la denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría del Medio Ambiente y a la Asamblea Nacional Nicaragüense donde se reunió con los Presidentes de las Comisiones de Salud, Reforma Agraria, y Derechos Humanos así como representantes de las Comisiones de Medio ambiente, Mujer y Niñez, quienes prometieron tomar cartas en el asunto y generar una reunión especial para debatir sobre este tema.

La procuraduría de los derechos humanos manifestó su preocupación ante los hechos, y tras tomar conocimiento detallado del contexto en el que se desarrollaron, reiteró su apoyo a la defensa de los derechos de los (as) nicaragüenses que se verían afectados por el consumo de productos tan controvertidos.

Por su parte, la procuraduría del Medio ambiente dio lugar a la denuncia interpuesta por las organizaciones, y mediante los mecanismos administrativos que la ley le confiere solicitó a los ministerios correspondientes que iniciaran un proceso de investigación, que de verificarse la presencia de transgénicos debería pasar a una fase de evaluación de los hechos para la posible eliminación de las cargas presentes.

Una de las reacciones más fuertes fue la del gobierno de los Estados Unidos, por medio de la embajada, que criticó negativamente el hecho de la denuncia, y aceptó ante la opinión pública que el 40% de la ayuda alimentaria era transgénica, pero que Nicaragua no tenía otra alternativa que aceptarla; sin embargo, ni siquiera el gobierno nicaraguense conocía del hecho que estos organismos estuviesen ingresando al país por la vía de la ayuda alimentaria.

Un paso muy importante dentro del proceso impulsado fue la difusión que se realizó de la denuncia en la Cumbre Mundial de la Alimentación y el Foro de las ONGs en Roma, con lo cual se proyectó a nivel mundial la envergadura del problema con los organismos transgénicos.

La resistencia continúa y la Alianza empuja fuertemente la moratoria de todo transgénico en Nicaragua en virtud del principio de precaución.



resistencia contra los ogms en la ayuda alimentaria: el caso de la ayuda alimentaria transgénica en nicaragua | parte tres

por julio sánchez, centro humboldt/amigos de la tierra nicaragüa

cuidemos y mejoremos nuestras semillas criollas

semillas y biodiversidad Cuidar la biodiversidad es cuidar la vida, desde los seres vivos más pequeños que no alcanzamos a ver, llamados microbios o microorganismos, hasta los más grandes como las plantas y animales silvestres y domésticos, incluyendo a los seres humanos que somos nosotros mismos y nuestros conocimientos sobre agricultura orgánica, alimentación sana y medicina natural.

Cuidar y aprovechar nuestras semillas criollas, es también una manera de cuidar nuestra biodiversidad y nuestra vida.

diversificación de cultivos

Diversificación de cultivos significa sembrar diferentes especies de plantas cultivadas, en nuestras parcelas y en toda la comunidad.

La diversificación de cultivos sirve como primer paso para beneficiarnos de la biodiversidad de las plantas, mejorando nuestra seguridad alimentaria y nuestra vida campesina.

Como muchos campesinos de diferentes comunidades, doña Justina Sánchez y don Juan Centeno de la comunidad El Coyolito (San Lucas), practican y se benefician de la diversificación de cultivos y la conservación de suelo y agua, sembrando en su pequeña parcela muchas especies diferentes de plantas como maíz, frijol común, gandul, caupí, jocote, naranja, limón, papaya y otros cultivos más. Así ellos mantienen su parcela con mucha biodiversidad y no les falta la comida

diversificación de variedades La diversificación de variedades es el segundo paso para aprovechar la biodiversidad de las plantas.

De cada una de las especies de plantas cultivadas se conocen muchas variedades diferentes. La diversificación de variedades se da cuando un productor o productora siembra dos o más variedades diferentes de cada cultivo; de esta manera garantiza la cosecha, porque si le falla una variedad por algún problema de plagas o sequía, siempre logra comida con las otras variedades que sembró.

El Productor que siembra una sola variedad de maíz, se arriesga a quedarse sin cosecha y sin comida cuando su única variedad le falle.

En la comunidad de El Aguacate (Santa María), la familia de don Juan Pablo Maradiaga tiene asegurada su alimentación durante todo el año, porque practica la diversificación de variedades de maíz. Esta familia siembra 5 variedades diferentes de maíz, de manera que cuando le falla una variedad, las otras cuatro garantizan su cosecha y su comida.

variedades criollas Las variedades criollas han sido heredadas de nuestros padres y abuelos, y son el fruto de la selección de semillas que los campesinos y campesinas hacemos durante cada cosecha.

Las variedades criollas de granos básicos, hortalizas, frutales y otros cultivos, son la base para que en el futuro sigamos produciendo y mejorando nuestras semillas de manera campesina. Si perdemos las variedades criollas, perderemos la oportunidad de mejorar el futuro para nuestros hijos.

Es necesario conservar, cuidar y aprovechar nuestras semillas criollas, porque desde tiempos de nuestros abuelos se han venido adaptando a las condiciones de cada comunidad. Para conservar las diferentes variedades criollas, la responsabilidad es de cada una de nuestras familias y de cada comunidad campesina, organizándonos todos los productores y productoras.

Por ejemplo, en la comunidad de Cuje (Totogalpa) todavía se cultivan muchas variedades criollas de maíz; las variedades criollas de maíz que se están cultivando en esta comunidad son 14: Amarillo grande, chinandega, chontaleño, jicareño, maquina, olotillo blanco, pata de gallo, pujagua blanco, rocamel, rojo, salvadoreño, venezuela, zorro amarillo y zorro blanco; mientras que las variedades que ya se perdieron en esta comunidad son: azul y cubano blanco. Esta comunidad de Cuje es pues un buen ejemplo de diversificación de variedades criollas de maíz, y sirve de reserva de biodiversidad agrícola nicaragüense.

Extracto del folleto de Programa Campesino a Campesino - Terra Nuova Madriz y Nueva Segovia, Nicaragua. 2001. Cuidemos y mejoremos nuestras semillas criollas.



resistencia contra los ogms en centros de origen: el caso de la papa en bolivia | parte cuatro

por maría luisa ramos, fobomade

“Es indignante que un pequeño país como el nuestro se vea forzado a aceptar alimentos modificados genéticamente, a pesar de la oposición pública”.

Declaraciones del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)

el papel crucial de la papa en bolivia

Bolivia es el centro de origen de la papa, y la diversidad genética de es cultivo es allí tan alta que dentro de un “ayllu” (la unidad productiva familiar local) se pueden encontrar hasta 70 variedades de papa, desde la agria o semi-agrio hasta una dulce. Estudios recientes han revelado que existen 235 especies de papas silvestres o cultivadas.

Los campesinos de la región andina montañosa satisfacen sus necesidades alimentarias a través de una agricultura diversificada con la ayuda de una gran biodiversidad. La papa es uno de los productos básicos más importantes del país y garantiza la soberanía alimentaria de las familias campesinas bolivianas y toda la nación.

Debido a que la preservación de las variedades de papas nativas es crucial para los agricultores en esa región, varias iniciativas de la comunidad local han sido lanzadas para revitalizar y mejorar semillas de papas locales. Una de esas iniciativas encabezada por Agruco (Agroecología de la Universidad de Cochabamba) consiste en mantener en un ayllu un banco de semillas “in situ” con más de 45 variedades nativas de papas. El banco de semillas funciona como fuente de suministro de variedades cultivadas no muy corrientemente, o de semillas si la calidad del germoplasma de los cultivos disminuye. De esta forma la biodiversidad de la papa es preservada y revitalizada.

introducción de la papa transgénica: los riesgos para bolivia

En abril del 2000, la comisión de bioseguridad boliviana aprobó una solicitud para realizar pruebas de campo con una papa transgénica resistente a nematodos. Las pruebas de campo iban a ser dirigidas por la Fundación Proinpa, con materiales vegetales originarios de la Universidad de Leeds en Inglaterra.

En Bolivia la contaminación genética por transferencia horizontal de genes de papas transgénicas representa un alto riesgo para las variedades tradicionales. Hay graves impactos potenciales sobre la biodiversidad y la diversidad cultural que incluyen, entre otros, erosión genética, desaparición de algunas variedades por derivación genética, y la desaparición de prácticas culturales tradicionales asociadas a la papa.

La contaminación genética podría ocurrir ya sea por los procesos naturales de polinización cruzada o a través de prácticas culturales contemporáneas como el intercambio de semillas entre los campesinos, que constituye una práctica importante para mantener e incrementar la gran variabilidad genética de ese cultivo.

El rasgo transgénico introducido que hace a la papa resistente a los nematodos, podría afectar otros micro-invertebrados que habitan en el suelo y a los cuales no se busca eliminar. Muchos de estos invertebrados desempeñan un papel central en la cadena trófica o alimentaria, sirviendo como comida para organismos mayores que incluyen ranas y pájaros. Ellos también contribuyen al ciclo nutriente que determina la salud del suelo. La desaparición de esos micro-invertebrados puede generar un impacto ecológico en cadena que afectaría toda la cadena trófica.

resistencia contra los ogms en centros de origen: el caso de la papa en bolivia | parte cuatro

por *maría luisa ramos, fobomade*

También existe el riesgo que los nematodos resistentes a la toxina introducida en la papa aparezcan, tornando estos nematodos en “super plagas” imposibles de controlar.

Los estudios que se estaban llevando a cabo en Inglaterra en el momento planeado para las pruebas de campo con papa transgénica en Bolivia no estaban terminados. Sin embargo, la Fundación Proinpa deseaba iniciarlas, aun cuando miembros de la Universidad de Leeds han reconocido que los riesgos para la biodiversidad son mayores en Bolivia.

resistencia popular contra la papa transgénica

Cuando se supo de la solicitud para realizar pruebas de campo con papas transgénicas, las organizaciones campesinas de distintas regiones andinas se opusieron a ellas en una carta dirigida al vice-ministro boliviano para los recursos naturales y el medio ambiente.

La principal organización no gubernamental para el desarrollo boliviana, conjuntamente con la Asociación de Productores Agroecológicos y la organización no gubernamental FOBOMADE enviaron declaraciones similares de rechazo. Desafortunadamente, la comisión nacional de bioseguridad hizo caso omiso de los deseos de las organizaciones de la sociedad civil respecto a este gravísimo tema de bioseguridad. Considerando el rechazo general a estos ensayos y los riesgos especialmente altos de los cultivos transgénicos para los países con alta biodiversidad como Bolivia, los miembros de FOBOMADE se sintieron obligados a interrumpir una reunión a puerta cerrada de la comisión de bioseguridad para expresar sus preocupaciones en persona.

Los planes de introducción de papa transgénica a su centro de origen en Bolivia causó una fuerte reacción nacional no prevista por los promotores del proyecto. Los campesinos de los Andes se opusieron fuertemente al proyecto y amenazaron con destruir los campos de ensayo. Entretanto, la Fundación Proinpa fué criticada muy fuertemente en reuniones públicas en La Paz, Cochabamba y Sucre.

La oposición internacional sorprendió a Proinpa. Cuando el proyecto de papa transgénica fue presentado en una conferencia sobre impactos de la biotecnología, organizada por Amigos de la Tierra y OXFAM en Bruselas en mayo del 2000, éste fue fuertemente criticado por muchos participantes, principalmente de las naciones en vías de desarrollo.

El 3 de junio del 2000, la Asociación de Productores Agroecológicos de Bolivia (AOPEB) organizó un seminario con la participación de Pat Mooney, de la Fundación Internacional para el Fomento Rural (RAFI, hoy ETC). Una vez más, los representantes de Proinpa se encontraron allí con un aplastante rechazo a los OGMs.

principio precautorio y alternativas a la papa transgénica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) reconoce que el principio precautorio debe ser aplicado a la biotecnología. En el Protocolo de Bioseguridad (aprobado en enero del 2000) el principio precautorio es reconocido como elemento clave para lograr la bioseguridad. Para Bolivia esto significa que el importantísimo recurso que constituye la biodiversidad de la papa no debería ser arriesgado por una tecnología que presenta más dudas que certezas.

En vinculación directa con el caso de la papa boliviana, FOBOMADE lanzó un llamado tanto nacional como internacionalmente, reclamando una moratoria para la liberación de cultivos transgénicos en el medio ambiente, especialmente en países que tienen variedades tradicionales o parientes cercanos a las variedades transgénicas.

En esa declaración también se afirma que los problemas de Bolivia deberían ser abordados con metodologías fundadas en la riqueza genética de la nación, no a través de métodos como la ingeniería genética que amenazan esa riqueza de biodiversidad. No se justifica usar técnicas de ingeniería genética en Bolivia cuando ni siquiera se ha estudiado exhaustivamente todo el potencial de las variedades de papa tradicionales. Más aún, el estudio de las variedades nativas bolivianas mediante métodos tradicionales de hibridación es algo que puede ser llevado a cabo fácilmente por los propios campesinos de la nación.

proyecto retirado

El 5 de junio del 2000 la Fundación Proinpa retiró su proyecto de realizar pruebas de campo con papas transgénicas, debido a “las polémicas que estaba generando la papa transgénica en el país” y a fin “de encontrar un momento mejor para realizarlas”.

la resistencia continúa

En septiembre del 2000, la Confederación Única de Sindicatos Campesinos de Bolivia puso el tema de los alimentos transgénicos en su agenda y persuadieron al gobierno de firmar un decreto que declara que “todas las autorizaciones para la producción de alimentos transgénicos quedan suspendidas durante el período de revisión establecido, hasta que se produzca el informe final que habrá de contener las recomendaciones y complementos que deberán incorporarse a las normas sobre bioseguridad y acceso a los recursos genéticos” (decreto 25929).

Luego en enero del 2001 el ministro de agricultura aprobó la Resolución Ministerial 2001, en la cual consta la decisión de “prohibir por el período de un año la importación de productos, subproductos y sustancias alimenticias de origen agrícola derivados de cultivos modificados genéticamente”. Esa resolución fue tomada como medida provisoria y preventiva para proteger la salud de la población. En nuevas negociaciones con el gobierno en agosto 23 de 2001, la misma Confederación persuadió al gobierno nacional a extender la resolución arriba mencionada más allá de diciembre del 2001 y elevarla a Decreto Supremo.

la influencia corporativa anula el decreto adoptado democráticamente

A pesar de ello, las ambiciones de realizar pruebas con papas y otros cultivos transgénicos aún persisten. Los grupos de cabildeo de las corporaciones transnacionales están ejerciendo presión permanente sobre el gobierno boliviano y sus instituciones para que abran sus puertas a las biotecnologías modernas. Liderado por los grandes productores de soja en Argentina, ese grupo de presión atacó duramente al decreto boliviano que prohibía los OGMs.

En un memorándum filtrado de las autoridades bolivianas se afirma que “el empresariado [argentino] de la soja está detrás de esto, pues ellos exportan 5 mil millones de dólares de soja genéticamente modificada a Europa y Norteamérica”. En el mismo memorándum, las autoridades bolivianas sostienen que la “situación actual es muy delicada, puesto que la Misión [permanente] de Bolivia [ante la ONU en Ginebra] considera que desde el punto de vista de las reglas de la OMC, las razones aludidas por la Misión Argentina son muy válidas, y nuestro país no tiene ninguna justificación sólida para respaldar la medida adoptada”.

De ese modo, y a pesar de la oposición generalizada de los agricultores y figuras dirigentes del movimiento ecologista y por el desarrollo sustentable, las presiones de los grupos empresariales rindieron fruto, cuando consiguieron que el gobierno levantara en octubre de 2001 el decreto que establecía la prohibición de importación de productos transgénicos hasta que se establecieran nuevas normas.

La anulación de ese decreto revela la debilidad del gobierno boliviano frente a la presión de los grandes productores de soja argentinos y las empresas de biotecnología. Es un atropello que se fuerza a un país pequeño como Bolivia a aceptar alimentos transgénicos contra su voluntad.

Las organizaciones campesinas y las ONGs ambientalistas bolivianas han prometido seguir urgiendo a su gobierno para que reglamente los OGMs a pesar de la presión externa. La preocupación es ahora aún mayor, desde que FOBOMADE encontró ingredientes transgénicos en la ayuda alimentaria que ingresa a Bolivia. La Asociación de Productores Agroecológicos de Bolivia reclama que se impongan controles a las importaciones de alimentos y semillas originarios de países como la Argentina, Canadá y EE.UU., y que se fijen sanciones severas para cualquier empresa u organización que comercialice productos transgénicos en Bolivia.

resistiendo las importaciones baratas y la 'liberalización del mercado': el caso de los cultivadores de frijol en Uruguay | parte cinco

por redes/amigos de la tierra uruguay, José P. Sánchez, Milton Silveira, Carmen Améndola

1. resumen

Desde la década del 80 el cultivo de poroto -que compone la canasta alimentaria básica de invierno de los uruguayos- comienza a descender ante la baja de precio provocada por las importaciones. Solamente un grupo de pequeños agricultores familiares ha mantenido el cultivo hasta hoy. En los últimos años las importaciones -bajo el paraguas de las políticas comerciales neoliberales- han invadido todo el mercado local de alimentos, propendiendo a la descomposición de la pequeña producción familiar, entre ellos a un grupo de muy pequeños agricultores que con trabajo familiar tiene entre su "canasta" de cultivos, el poroto de manteca.

Esta comunidad resiste la entrada de este producto al país, y lucha por mantener el cultivo abasteciendo el mercado nacional y conservar sus variedades adaptadas localmente después de más de un siglo de cultivo en el país.

2. los actores y su zona: los pequeños horticultores de Santa Rosa, Canelones

El poroto de manteca (*Phaseolus lunatus*) es cultivado por pequeños agricultores familiares hortícolas en las inmediaciones del poblado de Santa Rosa, del departamento de Canelones, al sur de Uruguay. Su ubicación responde a que se encuentran próximos a la ciudad de Montevideo, principal centro poblado y de consumo del país, y que concentra a la mitad de la población total.

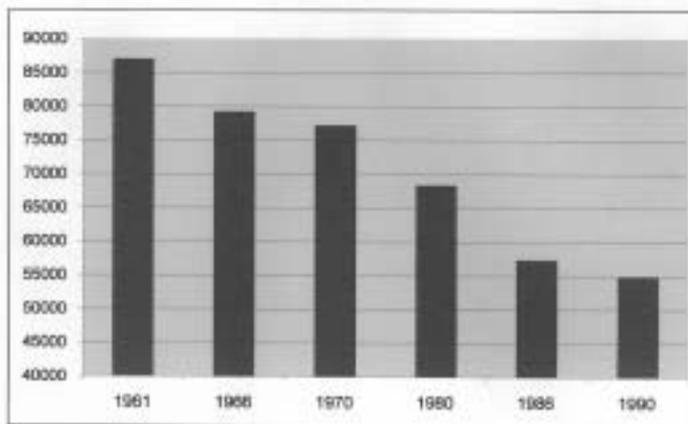
En términos generales y a modo de establecer una caracterización de la producción hortícola del Uruguay, hay que señalar que del total de los productores el 99% son de tipo familiar. A su vez, la horticultura no llega a controlar siquiera el 1% de la tierra disponible para la agricultura del país.

Como complemento a esta caracterización es necesario indicar que el rol de la agricultura familiar ha cambiado en el curso del devenir histórico según el proceso de acumulación capitalista. En los primeros cincuenta años del siglo veinte su papel fue producir alimentos baratos para el mercado interno, acompañando el proceso de urbanización primero y el de industrialización por sustitución de importaciones después. Estos pequeños agricultores, si bien siempre han producido alimentos para su autoconsumo, fundamentalmente han estado históricamente muy insertos en el mercado local y nacional.

Cuando en las últimas décadas cambia la política económica y se impulsa un modelo de acumulación "hacia afuera" a través de políticas neoliberales, su papel ya no es el mismo, puesto que despreciando la producción para el mercado interno se favorece la importación de alimentos.

Este nuevo rol de la agricultura familiar conduce a la misma a un severo proceso de abandono y de descomposición -en un proceso de disminución de predios principalmente de menos de 50 hectáreas y concentración de la tierra en empresas de más de 1000 hectáreas- que pone en jaque la independencia y seguridad alimentaria del país, junto a la pérdida de biodiversidad cultivada (ver Gráfico 1). Esta situación corresponde a la producción de poroto pero también a una serie de rubros que no son considerados por parte del Estado como posibles de ser producidos en forma competitiva. Los ejemplos más claros pueden ser la producción de maní, de lentejas, ajo, azúcar de caña en el norte del país y de otros rubros hortícolas y frutícolas. En este marco el único rubro subsidiado es la forestación, plantaciones principalmente de eucalipto que realizan grandes empresas extranjeras, entre ellas la empresa Shell.

gráfico 1: evolución del número de establecimientos agropecuarios en Uruguay



Fuente: Gómez, 1998 (en base a Censos Generales Agropecuarios-MGAP).

Las familias productoras de poroto de Canelones se encuentran afincadas en esta zona desde fines del siglo diecinueve; desde entonces el cultivo ha pasado a través de la tradición familiar de generación en generación. Este hecho tiene como resultado la configuración de una identidad cultural y el sustento socio-económico de una comunidad rural; la que, por intermedio de un conjunto de prácticas de manejo de variedades locales de semillas de poroto, se constituye en un agente clave en la conservación de la biodiversidad.

3. el rol del cultivo del poroto en las unidades de producción familiar

La información nacional acerca de cómo se trabaja el cultivo de poroto es escasa y antigua. Si bien hubo cierto interés por parte de la Facultad de Agronomía y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias entre los años 1986 y 1989, el mismo se perdió totalmente al constatarse la fuerte reducción del área sembrada año a año.

Los márgenes actuales son muy reducidos por efecto de la disminución del precio. En palabras del Ingeniero Agrónomo consultado, Rafael Caprio: "un kilo de poroto era equivalente a un kilo de carne y a un dólar. Para tener una idea, la carne barata está a 30 pesos, el dólar a 17 pesos, y un kilo de poroto está a 12 pesos en el mercado".

A pesar de esto y las consecuencias que se generan, los mencionados productores lo siguen plantando debido a que se adapta muy bien a sus suelos pobres y forma de producir, requiere de muy poco capital y proporciona subproductos para alimentación animal. Es decir, que hasta el momento el poroto ha sido un cultivo esencial en la sustentabilidad del sistema productivo.

Los suelos en los cuales se viene realizando este cultivo se han venido sometiendo a agricultura intensa en la ausencia casi total de rotaciones, en parte debido al manejo tradicional y en parte a que la reducida área de propiedad se los impide. Por lo que luego de casi 100 años de cultivos la capa arable de los mismos ronda los 20 cm, y es justamente en estos primeros 20 cm que el poroto de manteca concentra el 80 % de sus raíces, hecho que lo constituye en una especie ideal para ser cultivada en ellos.

Paralelamente, por ser una leguminosa, mejora las propiedades físico-químicas de los suelos, hecho que no ocurre con los demás cultivos que poseen tradición en la zona.

Esto se suma a que es un cultivo que requiere de muy poca inversión. Con buenas medidas preventivas, principalmente en lo que refiere a selección y almacenamiento de las semillas, el único "capital" necesario es un animal, generalmente un buey, las herramientas y por supuesto el factor trabajo.

Los subproductos que se obtienen son de gran utilidad en el sistema. Los granos manchados que no pueden ser comercializados se destinan a la alimentación de cerdos, y los fardos que se obtienen al retirar las plantas durante la cosecha sirven para alimentar los bueyes y caballos. Como indica Eucliver Cancela, un productor de la zona, "los granos manchados se le daban a los chanchos, y la rama (...) se aprovechaba como forraje; era buen forraje".

resistiendo las importaciones baratas y la 'liberalización del mercado': el caso de los cultivadores de frijol en Uruguay | parte cinco

por redes/amigos de la tierra uruguay, José P. Sánchez, Milton Silveira, Carmen Améndola

Por otra parte la compra o inversión en semillas no es necesaria, ya que parte de la cosecha es seleccionada por método visual para ser utilizada como semilla al año siguiente. Toda la producción nacional se basa en el uso de poblaciones locales adaptadas al ambiente, que se obtuvieron en cada predio tras varias generaciones de selección. En este proceso participaban todos puesto que "la familia lo clasificaba y apartaba, el trabajo del invierno era ese: arrancabas de mañana y después de tarde, hasta las doce de la noche a veces. Y en esto se estaba entre dos y tres meses siempre", cuenta Abilio Guasini, un productor entrevistado.

Si bien se evaluaron cultivares de otros países (Argentina, Brasil, Méjico), los comportamientos sanitarios y rendimientos de los mismos fueron muy similares a los que se obtuvieron con las variedades locales al aplicarles las mismas tecnologías.

Entonces el poroto de manteca es un cultivo que, apoyándose en el uso de variedades locales y con el trabajo como principal recurso, se adapta muy bien a la forma de producir de estos pequeños productores familiares. La drástica reducción de área que se puede observar es consecuencia de todos los factores antes mencionados, pero principalmente por la disminución que el precio de este producto ha presentado por los crecientes volúmenes importados (ver Cuadro 1).

cuadro 1: evolución de la superficie sembrada y número de explotaciones que cultivan poroto en el Uruguay en los últimos 20 años

	1980	1990	2000
número de explotaciones	3,789	1,006	305
superficie sembrada (há.)	3,137	1,352	454
superficie promedio (há.)	0.83	1.34	1.49

Fuente: Censos Generales Agropecuarios-MGAP (1980, 1990 y 2000)

4. el proceso socioeconómico de los últimos 30 años y su impacto en la horticultura

En los últimos treinta años se asiste a nivel mundial a un proceso de transformación socioeconómica sin precedentes que se encuentra signado por lo que se ha dado en llamar "globalización".

El proceso de globalización describe la expansión de las relaciones capitalistas de "mercado", es decir, la creciente mercantilización de numerosas esferas de la actividad económica, social y cultural que anteriormente no estaban incorporadas a él. A su vez, refiere también a procesos de integración de las diversas partes de la economía del mundo en un "mercado mundial" que comprende patrones de producción y consumo, mercado de factores de producción, y la orquestación de una organización cada vez más transnacional de la producción mundial.

Es decir, que el proceso de constitución y consolidación de la globalización responde a una nueva etapa en la evolución del sistema capitalista mundial que tiene por agente fundamental a las empresas transnacionales.

Muchos de los fenómenos que se agudizaron en las últimas décadas en América Latina, y en particular en Uruguay, son un reflejo de la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista globalizado. Esta intensificación del dominio del capital se vio alentado por la articulación de dos procesos combinados entre sí: la implementación de políticas neoliberales y la "modernización" del agro a través de la "Revolución Verde".

Las políticas neoliberales en el agro implican básicamente procesos de desregulación y de desprotección que tienen significados diferentes para los distintos sub-sectores. Estas políticas aplicadas (principalmente de apertura comercial, de ajuste fiscal y de anclaje cambiario) tienen como consecuencia dos procesos correlacionados que son la creciente concentración de la distribución de la tierra (reforzando la extensividad como forma de producción ganadera), y la migración de pequeños productores del campo a los centros poblados. A su vez la "Revolución Verde", difundida y promocionada por los grandes centros de poder mundial, acentúa las consecuencias mencionadas, de forma tal que quienes logran incorporar el "paquete tecnológico" recomendado son aquellos que poseen principalmente grandes extensiones de tierra y capital. Estos procesos afectan aún más a la agricultura familiar.

Por su parte, en un nivel prospectivo, el panorama no es para nada alentador ya que el proceso de integración regional (Mercado Común del Sur, MERCOSUR) ha mantenido esta tendencia debido al sostenimiento de las políticas de apertura comercial indiscriminada. Políticas que pueden verse profundizadas en caso de concretarse el proyecto ALCA de integración de las Américas.

En este contexto, la situación del sector hortícola se ve signada por la caída de la demanda interna debido a la pauperización del salario real, y a las políticas de apertura impulsadas desde el Estado que facilitan la importación de alimentos y por ende una mayor participación de las grandes empresas importadoras de productos alimenticios.

5. la movilización y resistencia

Para el caso del poroto, en Uruguay las principales empresas importadoras son: SILCOM S.A., SOLDADO HNOS. S.A. y NIDERA URUGUAYA S.A.; esta última de capital transnacional. Las mismas controlan casi el 70 % del comercio nacional y trabajan exclusivamente con producción proveniente de Estados Unidos, Perú y la Ex-Birmania.

Un factor que incidirá aún más es la disminución progresiva del Arancel Externo Común del MERCOSUR, actualmente del 13 %, colocando en una situación desventajosa a la producción nacional al viabilizar a bajo costo el ingreso de poroto producido en otras condiciones. Según datos proporcionados por NIDERA, la mayor de las empresas importadoras, mientras que hace poco más de diez años se trabajaba sólo con porotos nacionales, de la actual demanda de 210 toneladas 180 corresponden a lo importado y solamente 30 a la producción nacional.

Uno de los factores que explican esta situación se encuentra en que estos empresarios, ahora importadores (que obtienen grandes beneficios económicos por esta condición), consideran a la producción local como "atrasada y de inferior calidad". Al decir del gerente de NIDERA: "(la producción nacional) a esta altura es imposible, sería volver para atrás, (...) en otros lados se hacen grandes superficies de campo y tienen una máquina trilladora y acá se hace a mano (...) precisan una máquina para hacerlo bien".

Ahora bien, si consideramos el impacto que han tenido estas políticas en los productores de poroto de manteca vemos que han llevado a los mismos a un proceso de descomposición, disminuyendo drásticamente el número de productores y la superficie cultivada, como lo demuestran los datos del cuadro 1.

Las razones de este impacto residen en las políticas que se vienen implementando en los últimos años, que los excluye o margina de su medio de vida a quienes realizaban y actualmente realizan el cultivo de poroto. Tal como lo indica, Eucliver Cancela, uno de los productores "Entonces, quiere decir que no es porque uno se puso viejo y se jubiló y los hijos se fueron para Montevideo. Lo que pasa es que ya no se puede vivir más de la tierra, ese es el gran problema".

Es así que hoy en día los productores que se dedican al cultivo de poroto se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad como consecuencia de las políticas agrícolas que se llevan adelante. Y a su vez, la sociedad en su conjunto se encuentra frente al riesgo de proseguir erosionando su biodiversidad.



Frente a esta situación de crisis y descomposición de la producción los productores no han permanecido inmutables esperando la liquidación final; por el contrario, han buscado defender su derecho a seguir cultivando la tierra y continuar viviendo en y del campo. Este hecho cobra singular relevancia por tratarse de un sector que tradicionalmente ha tenido una escasa capacidad de movilización.

En un principio, las primeras respuestas o reacciones a la crisis fueron el desarrollo de estrategias de resistencia que posibilitaran no perder este cultivo que se integra a su racionalidad o estrategia productiva. En este sentido, mientras el precio del poroto caía, los productores comenzaron a diversificarse incorporando nuevos cultivos o simplemente aumentaron la superficie de los que ya venían realizando (boniato, cebolla, zanahoria, ajo y maíz). En palabras de Martín Cancela, uno de los productores: "No lo vamos a cambiar por ningún rubro, solamente vamos a plantar más de lo otro. Más de zanahoria y de cebolla, más ajo y algo más de boniato también".

A pesar de estas estrategias de resistencia también ocurrieron casos de abandono del cultivo, y en algunos casos incluso del medio. Generándose procesos de expulsión de familias hacia la ciudad en un doloroso desarraigo cultural, perdiéndose con ello no sólo población rural sino también las semillas, las variedades adaptadas y los conocimientos sociales generados por la experiencia de varias generaciones.

resistiendo las importaciones baratas y la 'liberalización del mercado': el caso de los cultivadores de frijol en Uruguay | parte cinco

por redes/amigos de la tierra uruguay, José P. Sánchez, Milton Silveira, Carmen Améndola

6. las propuestas de los agricultores de poroto

7. conclusiones y políticas recomendadas

Tras algunos años de resistencia local, la actitud adoptada fue la de agruparse e iniciar movilizaciones junto a otros pequeños productores del país que desde abril de 1999 han realizado a nivel nacional cortes de ruta, marchas, actos y presión directa sobre el poder político. Recientemente se realizó una importantísima movilización de los pequeños y medianos productores del país y sus organizaciones junto a la central única obrera PIT-CNT, que no tenía antecedentes en la historia nacional.

En el año 2000, tras algunas reuniones entre los productores de poroto de la zona, se elaboró una carta dirigida al Ministerio de Ganadería y Agricultura y a la Federación Hortícola de la que se buscaba obtener respaldo, en la cual se exhortaba a suspender la importación de poroto al menos por ese año. A su vez, y en un marco de movilizaciones generales del sector agropecuario, los productores acoplan sus demandas particulares y establecen alianzas con otros sectores rurales en defensa de la producción de alimentos, participando de huelgas y piquetes en rutas nacionales.

A pesar de la lucha, el gobierno hace oídos sordos a los reclamos; existe una ausencia total de respuestas, pues se apuesta a un modelo de desarrollo productivo basado en grandes productores empresariales. Los productores de poroto no ven con buenos ojos el futuro cercano de la producción puesto que: "ya en la zona acá casi no se planta, porque acá en la zona habían muchos plantadores y ahora ya no planta ninguno. Va quedando alguno chico con tres o cuatro cuerdas...", relata José González, un agricultor de la zona..

En la articulación de las demandas se hace referencia a lo que consideran serían las condiciones mínimas necesarias para poder continuar produciendo poroto. Las propuestas de los agricultores pasan principalmente por un control o supresión de las importaciones, aunque también se plantean reclamos comunes a todo el sector al referirse a la política cambiaria e impositiva.

Hay consenso entre los productores al referirse a las importaciones provenientes de regiones que producen con otras condiciones como la causa de la disminución de los precios, principal factor que incide en la reducción del cultivo. Tal como lo expresa el productor Martín Cancela, al señalar que: "Para mí todo el problema es de las traídas, que tupen el mercado y después no hay a quien venderle (...); el precio ha cambiado porque cada vez es más lo que se importa, lo que se trae de poroto" .

Los productores sostienen que con solamente controlar las importaciones el rubro volvería a ser viable; se incrementaría el número de productores, el área y la producción de este cultivo que se realiza en el país en condiciones de agricultura orgánica, con la utilización de fuerza de trabajo de todo el núcleo familiar y cuyo destino histórico ha sido el mercado local y nacional . Es por esto que todas las propuestas se centran en el aumento de aranceles o en la limitación de los volúmenes importados.

A partir de las transformaciones socioeconómicas ocurridas a nivel mundial y las políticas neoliberales del ámbito nacional, la producción de poroto en el marco del sector hortícola sufre una drástica reducción de su producción. Esta reducción se ve acompañada en muchos casos por la emigración de familias enteras a los cinturones de pobreza de las ciudades.

Este proceso implica un cambio radical en las formas de vida de las familias al dejarlas en una situación de altísima vulnerabilidad social, además de la pérdida de biodiversidad cultivada representada en las variedades locales adaptadas de poroto manteca. A su vez, los conocimientos asociados que se han desarrollado a través del tiempo en el seno de esta comunidad de agricultores constituyen un patrimonio irrecuperable.

Consiguientemente, se está condenando a un cultivo cuya integración a estos sistemas productivos tiene múltiples beneficios, tales como ser mejorador del suelo, aportar sub-productos destinables a alimentación animal y no requerir de inversiones de capital. Por ende deberían de establecerse acciones destinadas a la conservación del cultivo, la cultura y modo de vida de estos agricultores.

Al no estarse desarrollando un modelo productivo sustentable se está poniendo en jaque la seguridad alimentaria, entendiéndose que la misma se logra manteniendo y promoviendo una base estable de producción local de alimentos. Para lograrla son necesarios medios que protejan y promuevan la oferta nacional de alimentos, acortando la distancia entre la producción y el consumo en lugar de aumentar la liberalización del mercado de alimentos. Esto último no es más que expresar con otras palabras lo que los productores de poroto reclaman.

La solución pasa además por desarrollar modelos de desarrollo productivo basados en la biodiversidad, agro ecosistemas manejados en forma sustentable con alta diversidad biológica y genética, utilización de subproductos y conservación de los recursos naturales considerando las realidades sociales y culturales. En definitiva, incentivar la producción local de cultivos alimentarios adaptados al entorno natural y socioeconómico, mejorando los sistemas de producción como medio para mejorar la calidad de vida de la gente en armonía con la de los ecosistemas naturales.

Estos modelos de desarrollo deben de comprender entonces a la sustentabilidad desde cuatro dimensiones fundamentales: social, ecológica, política y económica. El caso del poroto, al igual que el de muchos cultivos alimenticios podría revertirse si se adoptara un modelo de desarrollo sustentable a tiempo. Porque como sostuvo uno de los productores entrevistados, Eucliver Cancela: "Aquí las cosas 'mañana', es tarde; tiene que ser hoy" .



resistiendo la privatización del agua y la agricultura de la revolución verde: el caso de la liberalización de los servicios y el agua de riego en Ecuador | parte seis

por cecilia chérrez, acción ecológica

1. resumen

La anunciada construcción de la Presa Villao como parte del "Proyecto de Propósito Múltiple Pedro Carbo" en el extremo sur-oeste de la región cuenca del río Guayas, ha desatado una ola de rechazo y movilización campesina pues la obra no sólo conlleva el desplazamiento de las más de 700 familias asentadas en los 17 recintos que están dentro de las 2.400 hectáreas que van a ser cubiertas por el agua, sino que además provocará el despojo de tierras a unas 2000 familias a las cuales se les aplicarán coactivas por no poder pagar el costo del beneficio obligatorio de ser integrados al sistema de canales de riego derivados de la Presa, ni el costo del agua, dentro de las 13.500 hectáreas contempladas en la zona que recibirá el riego, 11.000 con agua de la represa y 2.500 con agua subterránea.

La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE -entidad descentralizada del sector público - prevé el diseño de un "modelo integral de desarrollo" basado fundamentalmente en la agricultura intensiva orientada casi en su totalidad a la exportación. Algunos impactos ecológicos previsibles tienen que ver con la contaminación del suelo y el agua por el aumento alarmante de la dependencia a los agroquímicos, cuyas ventas anuales se prevén en el proyecto como una de las que más dinamizarán el comercio y la industria. Sin contar con los impactos que tendrán en la salud humana

2. escenario

- ¿qué está en juego?

Hay, por lo menos, tres aspectos principales.

1. el plan de cambiar de manos la tierra: Las tierras ubicadas en la cuenca del río Guayas que aún se encuentran en manos de campesinos han sido por mucho tiempo apetecidas por empresarios poderosos, sobre todo aquellos pertenecientes a ciertos grupos de Guayaquil. Las formas de apropiarse de ellas han sido preferentemente aprovechando las cíclicas dificultades económicas de los pequeños productores atrapados en la dependencia a monocultivos estrella totalmente orientados al mercado y atados al crédito como el algodón, la soya, lo que les ha llevado a la ruina cuando se desploman los precios a causa de la sobre-producción o porque las autoridades deciden importar los mismos productos a precios más bajos; así que, forzados a vender las cosechas aún a precios inferiores al costo de producción, no pocos campesinos han ido vendiendo sus fincas a precios desesperados... irrisorios. Al abrirse la posibilidad de contar con riego, los grandes empresarios agrícolas apuntan a consolidar, con las tierras bajo su control, un gran proyecto agro-exportador que les promete una gran rentabilidad. El proyecto prevé la generación de un mercado de tierras a través de la "reestructuración y transferencia de la tierra, que podría permitir la libre comercialización del orden de 10.000 de las 13.500 hectáreas del proyecto"

2. legalizar la privatización del agua de riego: éste ha sido un objetivo recurrente

de los distintos gobiernos desde hace más de una década. Con apoyo del Banco Mundial y del BID, se han elaborado numerosos proyectos de ley de aguas que buscaban más o menos camufladamente, garantizar el agua sólo para actividades de alta rentabilidad. Pero cada vez, el movimiento indígena y campesino organizó movilizaciones y marchas hacia Quito que interrumpieron las pretensiones del poder de violentar su derecho al agua. Sin embargo, cuando el régimen buscaba consolidar la dolarización, en el 2000, emitió leyes especiales, consultadas con el FMI, que impulsaron agresivamente las privatizaciones y liberalizaron la economía; una de estas leyes, Para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, reformó 31 leyes, entre ellas la ley del CEDEGE, a fin de que entregue en forma "obligatoria" sus obras, por las que "las propiedades beneficiarias responderán con su valor por la nota de débito que emita CEDEGE, sin excepción". Y señala expresamente que se responderá "al costo de la obra o proyecto ejecutado, prorrateado entre las propiedades beneficiadas de los mismos".

- los principales actores

El Proyecto Pedro Carbo es el primero que se ejecutaría después de los mencionados cambios legales, y en concreto significará que cada "beneficiario" del riego deberá pagar 5.278 dólares por "la tecnificación" de cada hectárea y cerca de 1.000 dólares anuales por el agua para cada hectárea. Estas imposiciones volverán prácticamente imposible que los pequeños -y hasta los medianos- agricultores puedan participar del nuevo modelo agrícola. El proyecto menciona que a partir del 2015 los ingresos serán de 12.000 dólares por hectáreas, con costos de producción de 8.300, lo que dejará unos ingresos netos de 3.700 dólares por hectárea, y dice que "esta no es una rentabilidad alta para la agricultura, por los riesgos en el proceso productivo y en la comercialización"

3. consolidar una agricultura orientada a la exportación: que definitivamente abandone el objetivo de abastecer los mercados locales y nacionales, y que convierta a los campesinos que han perdido sus tierras, en jornaleros de las nuevas unidades productivas, inmensas y distantes como toda agro-empresa.

- La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE: entidad descentralizada del sector público que administra el Trasvase Daule Peripa, el sistema de riego más grande del país en el que se inserta el "Proyecto de Propósito Múltiple Pedro Carbo" que incluye la Presa Villao, el sistema de canales de agua para riego, pozos para agua subterránea y sistemas de drenaje, a los que se agregan caminos.
- Lavalin Internacional, empresa canadiense, elaboró el proyecto conjuntamente con personal de CEDEGE desde junio de 1989, después que en marzo de ese año se suscribió un Convenio de Asistencia Técnica entre el gobierno ecuatoriano representado por CEDEGE y el Gobierno de Canadá representado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo "para la elaboración de un proyecto de riego de 13.500 hectáreas a nivel de factibilidad". A principios de 1988, estas mismas dos partes "seleccionaron al proyecto Pedro Carbo como prioritario y de gran interés para el Ecuador". El proyecto fue terminado a fines del '90.
- El Frente de Defensa de Pedro Carbo, integrado por organizaciones campesinas, iglesia católica, seguro campesino, ecologistas, asociaciones juveniles, organizaciones de desarrollo, instituciones de crédito campesino, los recintos afectados.

- sitio donde se desarrollará el proyecto:

El proyecto Pedro Carbo se ubicaría en el extremo sur-oeste de la cuenca del río Guayas, a 40 km de la ciudad de Guayaquil, una zona que se caracteriza por ser seca y contar con lluvias la mitad del año, que es cuando los ríos aumentan el caudal y pueden desbordarse. En algunos sitios, la rica sedimentación que dejan estos desbordamientos fue aprovechada para actividades agrícolas adaptadas a esa situación; sin embargo desde hace varios años se fue imponiendo una agricultura orientada exclusivamente al mercado, que forzó a los campesinos a usar sus parcelas en función de la mayor productividad, provocando que actualmente algunas áreas de cultivo se pierdan durante la estación lluviosa. De todas maneras, el área que se prevé inundar para la presa es un valle reconocido localmente como uno de los más verdes y fértiles de la zona, característica que se refleja en los nombres que los habitantes han dado a varios de los pequeños poblados que se encuentran allí y que serán inundados: Bejuco de María, Estero de Piedra, San José, El Salto, Las Bijamas, Santa Rosa, Prócel de Villao, Prócel de la Fortuna, Prócel, El Aguacate, Boca de Guanábano, La Providencia, San Pedro de Villao, Villao, El Paraíso, Boca de Bálsamo. Muchos campesinos que viven en los recintos Cristo del Consuelo, Las Planchadas y Anonas serían afectados por tener tierras dentro de las 2.400 hectáreas que cubre la Presa.

resistiendo la privatización del agua y la agricultura de la revolución verde:

el caso de la liberalización de los servicios y el agua de riego en Ecuador | parte seis

por cecilia chérrez, acción ecológica

3. la biodiversidad, clave para la economía de la población

La zona que recibirá el riego está a pocos kilómetros al oriente de la presa, es también seca, pero ya es un área con gran concentración de tierra en manos de latifundistas que en su mayoría se dedican al cultivo de mangos para el mercado internacional, y utilizan riego a partir de agua subterránea. Sólo 32 propietarios, con el 5% del total de predios, controlan 7.695 hectáreas, que equivalen al 57% de la tierra que se beneficiará con el proyecto; con una extensión media de 233.21 há.. Mientras el 76% de los predios, muchos de ellos sin títulos de propiedad, o en calidad de arrendatarios, tienen sólo el 16% de la tierra, es decir 2.160 hectáreas. "Es la zona de las nuevas agro-industrias", dice un miembro del Frente de Defensa de Pedro Carbo, y por lo tanto lo que se viene concentrará más tierra en menos manos.

Aunque la mayoría de la producción son monocultivos de maíz duro y unos pocos productos más, algunas familias campesinas aún reservan una parte de sus parcelas para la provisión de productos básicos de su dieta, como el fréjol, maní, ajonjolí, morocho, arroz, y criar animales menores o ganado vacuno, y aprovechan la estación de lluvias, de enero a mayo, para cultivar tomate, pimiento, yuca, plátano.

Conservar estas prácticas resultan casi heroicas considerando que por décadas la economía campesina fue forzada a sustituir la diversidad de productos propios de la zona por unos pocos, que fueron agresivos y crecientemente promocionados por programas estatales e internacionales que incluyen la masiva distribución de semillas certificadas que los fueron haciendo cada vez más dependientes de los insumos químicos.

Los ríos han perdido casi totalmente la pesca debido a los niveles de contaminación que llega desde las fincas, pero además por la utilización indiscriminada que hacen los municipios de los lechos de los ríos a los que se les considera nada más que canteras que proveen de material pétreo para afirmar caminos.

Sin embargo, campesinos como son, tienen su vida y su cultura unida a los ciclos agrícolas y a una abundancia y diversidad que aunque se ha perdido en su mayoría podría ser una base y semilla de recuperación ecológica y de autonomía frente a la lógica del mercado.

Don Severo Santos y su esposa, en Villao, han recorrido juntos el camino de hacer concesiones al modelo agrícola de la revolución verde y perder, a cambio, una diversidad ecológica que les aprovisionó sin dinero. Sembraron "café hasta el año 53, y algodón criollo", pero en las fincas crecían muchas cosas que en algunos casos han disminuido mucho o no se encuentran más. En los recuerdos se mezclan la diversidad del pasado con lo que aún queda y con lo que se puede todavía recuperar, y entonces cuentan que "aquí crece la papaya, el mango, el coco, la higuera, el ajonjolí, distintos tipos de maíz, de fréjol y de maní, hay arroz; hay árboles que dan fibras, como el pijío y el ceibo; hay plantas medicinales como la caña fístula; crece el piñuelo que sirve para cercar y además lleva fruto; el álamo crece a orillas del río y da alimento para los animales, ya casi no se ven árboles como el guayacán, el tillo, el castaño, el guachapelí, el amarillo, el palo de vaca, ni el laurel, ni se le ve al venado, al saíno, la guanta, ni a las perdices. Pero de cuando en cuando se oye al pacharaco cantándole a la lluvia".

Cuando ellos escuchan que muchas organizaciones campesinas están buscando la autonomía a través de recuperar la diversidad en sus cultivos y en el paisaje natural, dicen con gran naturalidad que "para eso, hay que unirse y pensar mejor en lo que se siembra y en lo que se come".

- impactos del proyecto en la vida campesina

Los impactos son decisivos: desplazamiento en el caso de las familias campesinas asentadas en áreas de la presa; y despojo de las tierras en el primer año de aplicación del proyecto de riego, el 2003.

El proyecto dice que los pobladores de los recintos ubicados en la zona donde se piensa construir la presa "serán trasladados", o desplazados que es lo mismo, con el agravante de que un número importante de familias no poseen títulos de propiedad sobre las tierras debido al alto costo de los trámites exigidos, y por lo tanto no tendrán ninguna forma legal de hacer respetar sus derechos ni recibir indemnización alguna.

Las miles de familias que perderán sus tierras en el área de las 13.500 hectáreas que recibirán el riego, serán despojadas de sus tierras en el primer año de aplicación del proyecto pues el reglamento de la nueva ley del CEDEGE, firmado el 14 de Septiembre del 2001 por el presidente de la república incluye los siguientes elementos:

- "el costo de la obra o proyecto será prorrateado entre los propietarios beneficiarios de la obra" (art. 2),
- "Cedegé llevará un catastro de los inmuebles beneficiados" (art. 4),
- "las propiedades beneficiarias, cualquiera sea su título legal o situación catastral, responderán con su valor por los títulos de crédito u órdenes de cobro que emita Cedegé (art. 5)

"el pago de los títulos de crédito (...) se deberá efectuar mensualmente" (art. 7)

"el tesorero de CEDEGE iniciará los procedimientos coactivos contra los deudores (...) que no hayan pagado dicho tributo en el plazo señalado en el artículo anterior" (art. 8)

Con una especial cuota de cinismo, el artículo 1 del mismo reglamento dice que "... las comunidades informarán a CEDEGE, dentro de los treinta días posteriores a la promulgación de este reglamento sobre la ubicación exacta del predio que mantienen en comunidad y sobre la nómina y edad de los comuneros, información última que servirá para la aplicación de la Ley del Anciano".

El CEDEGE ha guardado silencio desde que las organizaciones locales presentaron públicamente su rechazo al proyecto, a finales del año 2001.

4. vínculos con la globalización corporativa

El proyecto responde a la necesidad de vincular la producción agrícola nacional con las demandas del mercado global, en base a una escala que sólo garantiza la agro-empresa en base a la concentración de tierras en manos de poderosos inversionistas, y al uso de paquetes tecnológicos que incluyen semillas, fertilizantes, plaguicidas y maquinaria abastecidas por las grandes transnacionales.

Hay que destacar que en este caso la infraestructura de riego juega un papel clave y decisivo. Si bien CEDEGE inició hace 20 años el plan hidráulico en base a la cooperación con la CEPAL y ya incluía el embalse sobre el río Pedro Carbo, el proyecto actual responde a nuevas tendencias y políticas económicas. Como ya se dijo, la banca multilateral de desarrollo ha estado influyendo durante los años '90 en el diseño de la política nacional sobre el agua, y es evidente que el sistema de riego derivado del trasvase Daule Peripa se le piensa destinar para los programas más agresivos. Difícilmente calzarán con las nuevas exigencias económicas vinculadas al riego los medianos y hasta algunos grandes agricultores, porque estarán sujetos a las reglas del mercado global, que no controlan. Así que lo más probable es que a lo mejor sólo muy pocos de los más grandes inversionistas nacionales, y las empresas transnacionales agro-alimentarias, podrán ser parte del nuevo esquema, sobre todo éstas porque controlan desde las semillas, los insumos, manejan las reglas del comercio, y más recientemente buscan controlar el agua, como lo afirma Monsanto.

resistiendo la privatización del agua y la agricultura de la revolución verde: el caso de la liberalización de los servicios y el agua de riego en Ecuador | parte seis

por cecilia chérrez, acción ecológica

5. respuestas de las comunidades

Lavalin International, o SNC-Lavalin Inc., es la empresa que elaboró el proyecto y se encargaría de la operación, manejo y administración del mismo; se describe a sí misma como uno de los grupos líderes a nivel mundial en la ingeniería y la construcción, y con una trayectoria en la industria química y de petróleo. Como suele suceder, entre sus programas, la empresa dice desarrollar actividades de evaluación de impactos ambientales, por lo que no se espera que la documentación del proyecto incluya información independiente sobre los impactos que ocasionará. De hecho, ya existen muestras en el texto de que esto es así: " la categoría de mayor impacto positivo es socioeconómico, mientras que siendo menores los impactos positivos en el medio biológico y físico, son en todos los casos mayores que los negativos, lo que justifica la ejecución del proyecto".

Después de que varias organizaciones campesinas obtuvieron el resumen del proyecto con ayuda de un diputado del Congreso Nacional, su lectura les dio los elementos suficientes para analizar, junto con otros sectores sociales, los diferentes niveles de impacto que sufrirían. Casi inmediatamente se conformó un Frente de Defensa de Pedro Carbo, y se decidieron actividades concretas.

Una de ellas fue realizar una gran concentración pública a la que debía acudir el director de Cedegé, para informar sobre el proyecto. Esta asamblea reunió a cerca de 3000 campesinos, que aunque esperaron en vano la llegada del funcionario, fue de todas maneras aprovechada para presionar al municipio de Pedro Carbo a favor del sector campesino. Las autoridades locales hasta entonces habían seguido el juego del Cedegé y presentado una posición ambigua ante las organizaciones, hasta que el 8 de abril del 2002 emitieron una ordenanza que expresa la desaprobación por parte del alcalde y todos los concejales sobre la construcción de la presa.

En febrero, varios líderes locales visitaron, en la misma provincia, una presa construida hace más de un año que significó también desplazamientos con niveles de violencia que provocaron unas 35 muertes, que fueron convenientemente presentados por los medios de comunicación como unos eventos con rasgos de delincuencia común.

El Frente de Defensa de Pedro Carbo se reúne cada mes para asegurar un seguimiento minucioso del proceso, y ha ido creando espacios populares entre los afectados para analizar la problemática del agua.

Algunos líderes locales han empezado a vincular este caso con las reglas que imponen los tratados de libre comercio, y seguramente aprovecharán las masivas movilizaciones sociales que se darán para bloquear las negociaciones del ALCA durante la próxima Conferencia de Ministros, en Quito, entre el 31 de octubre y el 1 de Noviembre, para amplificar el conocimiento de lo que está sucediendo en su zona, en nombre de la liberalización del mercado del agua y nombre de garantizar los derechos de los inversionistas por sobre los del cuidado a la vida y la cultura.



resistiendo la imposición de semillas transgénicas para la industria textil: el caso del algodón bt en indonesia | parte siete

por walhi/amigos de la tierra indonesia

"Hay dos posibilidades para mi cosecha de algodón: puedo guardarla hasta que se pudra, o quemarla. Aunque pierda el dinero y el esfuerzo invertidos, es preferible a vendérselo a Monsanto"

Baco, agricultor de la aldea Manyampa, Sulawesi del Sur.

PT Monagro Kimia, una subsidiaria indonesia de Monsanto, la gigantesca empresa estadounidense de agroquímicos, inició ensayos agronómicos en 1996 a fin de encontrar variedades de algodón a cultivar en Indonesia, particularmente en Sulawesi del Sur. En 1998 y como parte del proceso regulatorio de la comercialización de cultivos de ingeniería genética, se llevaron a cabo ensayos en invernadero y ensayos de campo limitados. En 1999 el algodón Bt fue aprobado por el gobierno indonesio y declarado ambientalmente seguro para ser cultivado en el país. Sin embargo, PT Monagro Kimia había estado distribuyendo las semillas del algodón Bt desde 1998¹.

La compañía ha llevado a cabo ensayos de campo con semillas de algodón desde 2000, diciendo que se trataba "de los primeros ensayos de campo de organismos transgénicos" en Indonesia. Se estima que la cantidad de tierra plantada con algodón Bt en 2000 oscilaba entre 500 y 1500 hectáreas.

El 15 de marzo de 2000, cuarenta toneladas de semillas de algodón genéticamente modificadas llegaron desde Sudáfrica al aeropuerto Hasanuddin en Makassar, Sulawesi del Sur. Las semillas importadas por PT Monagro Kimia, fueron transportadas en camiones escoltados por guardias armados, para ser vendidas a los agricultores de siete distritos de la provincia.

Los activistas de las ONGs locales, contrarios a la importación, trataron de bloquear la salida de los camiones del aeropuerto. Declararon que las semillas debían ser puestas en cuarentena para un análisis detallado, previo a su distribución; y acusaron a la compañía de intentar ocultar lo que estaban haciendo, utilizando camiones con la leyenda "distribución de arroz". Las ONGs también protestaron contra la utilización de personal militar indonesio (en este caso de la policía militar) para escoltar los camiones.²

En una carta dirigida al diario Jakarta Post, Monsanto -la tercera empresa de biotecnología más grande del mundo dedicada a la producción de transgénicos y una de las tres mayores productoras de semillas y agroquímicos- sostiene que los oficiales de cuarentena indonesios habían llevado a cabo una inspección en Sudáfrica, previa a la liberación de la mercadería, y habían cumplido con todos los procedimientos de importación y cuarentena. El personal de Monsanto declaró al diario que las semillas importadas estaban destinadas a abastecer las necesidades de los productores de la provincia. "Hay por lo menos 400,000 hectáreas de plantaciones de algodón a ser desarrolladas aquí por los productores indonesios" declaró el gerente de comunicaciones Tri Soekirman. La compañía ha estado tomando medidas precautorias y "el público no debería preocuparse por el impacto negativo de los cultivos". También declaró que no han habido quejas en EEUU, Sudáfrica, China o Argentina, donde ya se ha cultivado el algodón transgénico; y agregó que Australia lo ha estado cultivando desde hace cinco años.

La semilla desarrollada por Monsanto es conocida como NuCTN 35B, Bt, DP 5690B o "Bollgard". "Bt" se refiere al gen de una toxina insecticida que ha sido aislada de la bacteria *Bacillus thuringiensis* que habita en los suelos, y se ha insertado en la semilla de algodón. Indonesia es un gran importador de algodón, una de las materias primas para su gigantesca industria textil.

2 | "Kaman terhadap pengiriman benih transgenik", declaración de las ONGs circulada por correo electrónico por YLK Suisel el 15 de marzo de 2001, Jakarta Post 17 de marzo de 2001.

3 | *ibid*

1 | "Se inicia batalla legal sobre los productos biotecnológicos", The Jakarta Post, 22 de junio de 2001

resistiendo la imposición de semillas transgénicas para la industria textil: el caso del algodón bt en indonesia | parte siete

por walhi/amigos de la tierra indonesia

el decreto del gobierno

Las semilla transgénica llegó cinco semanas después del 6 de febrero de 2001, fecha en que el ministro de Agricultura emitiera un decreto (Nº 107/2001) que autoriza la comercialización limitada de la variedad de semilla de algodón Bt DP 5690B como semilla de calidad, bajo el nombre comercial NuCOTN 35B (Bollgard), para ser cultivada en siete distritos en Sulawesi del Sur- Takalar, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Soppeng y Wajo; pero el decreto no establece ninguna restricción en cuanto al área cultivable. PT Monagro ya ha llevado a cabo ensayos de campo con el algodón transgénico en 500 hectáreas en los distritos de Bantaeng y Bulukumba. Según los medios y de acuerdo a los informes de las ONGs, la cosecha ya ha sido vendida en mercados locales y extranjeros. Aparentemente, las ventas se llevaron a cabo como si se tratara de un cultivo convencional. Las ONGs llegaron a la conclusión de que el Ministro de Agricultura simplemente buscaba legitimar anteriores violaciones por parte de PT Monagro Kimia.³

El decreto de febrero fue emitido silenciosamente, sin consulta pública. Incluso parecería que otros ministros no fueron informados. El Ministro de Medio Ambiente, Sonny Keraf, dijo que el decreto respondía a "políticas comerciales". Un editorial del Jakarta Post caracterizó el incidente como un caso triste en el que "los intereses empresariales...prevalecen sobre las preocupaciones ambientales".

Un acuerdo anterior que permitía la venta de algodón transgénico había sido cancelado a último momento por el entonces Ministro de Economía, Rizal Ramli, en octubre de 2000 luego de intensas presiones de las ONGs y la intervención del Ministro de Medio Ambiente de la época, Sonny Keraf. Esta vez, el Departamento de Agricultura eludió la oposición al no hacer públicas sus intenciones y no informar a nadie de antemano.

las ongs en la corte

En junio, una coalición de ONGs indonesias en defensa de la Bioseguridad y la Seguridad de los Alimentos - ICEL, Konphalindo, PAN, YKLI y YLK Sulawesi Selatan, entre otras- iniciaron acciones legales contra el decreto. Buscaban, a través de la Corte Administrativa Estatal, la anulación del decreto de febrero que autorizó la liberación y venta limitadas de semillas genéticamente modificadas en Sulawesi.

Estos grupos alegaron que el decreto fue emitido con gran apuro, sin tomar en cuenta las consecuencias de la utilización de productos transgénicos, y que viola la ley de Medio Ambiente de Indonesia (23/1997) ya que no incluye una evaluación de impacto ambiental y tampoco ha respetado el derecho del público a la información y a participar en la toma de decisiones. Si bien el decreto permite la venta "limitada" del algodón, señalan, no existe restricción en cuanto al área que puede ser plantada dentro de los siete distritos.

Las ONGs están preocupadas porque el decreto llevará a que una compañía detente el monopolio de las semillas y otros insumos como fertilizantes y pesticidas. Por otra parte, esto también podría minar o destruir los logros de los sistemas agrícolas vigentes centrados en las personas y el medio ambiente, tales como el manejo integrado de plagas, y crear una dependencia tecnológica perjudicial para los agricultores.

4 | "Gobierno indonesio prorrogará el permiso para la plantación de algodón transgénico", cable de Dow Jones, 18 de setiembre de 2001

6 | Kompas, 17 de abril de 2001

7 | Ibid.

5 | "Monsanto contento declara que el proyecto de algodón continuará", The Jakarta Post, 21 de setiembre de 2001

8 | Ibid

protesta contra los organismos genéticamente modificados (ogm)

También señalan que el algodón transgénico de Monsanto no es necesariamente el mejor tipo de semilla para los cultivadores de algodón, ya que no es apto para soportar las principales plagas del algodón que se encuentran en Sulawesi, y por tanto requiere de la aplicación de grandes cantidades de plaguicidas. Este hecho ya había sido evidente durante los ensayos de campo, en los que el algodón transgénico sucumbió a las sequías y al ataque de los insectos. Las semillas son más de cinco veces más caras que las del algodón Kanesia 7 desarrolladas por la Dirección para el Estudio del Tabaco y Plantas Fibrosas (Balittas) de Indonesia, que, bajo sistemas de manejo integrado de plagas (MIP), logran el mismo rendimiento de 2 a 3 toneladas prometido por Monsanto para su algodón Bt. Muchos agricultores de Sulawesi del Sur desean comprar el algodón Kanesia 7, pero se encuentran con que solamente el algodón Bt de Monsanto está disponible. Esto, argumentan las ONGs, viola la ley N° 12/1992 sobre Cultivos que establece que los agricultores son libres de elegir qué cultivos plantar.

El 27 de setiembre de 2001, la coalición de ONGs perdió el juicio en la corte. El gobierno decidió prorrogar la autorización a PT Monagro Kimia para que pudiese seguir plantando el algodón Bt en Sulawesi del Sur en 2002, cuando expirara la actual autorización⁴. A principios del mes de setiembre, el ministro de Agricultura declaró que el algodón Bt se plantaría en mayor escala en Java del Este y Java Central⁵.

En abril de 2001 cientos de agricultores y activistas de ONGs se unieron a una manifestación liderada por la Federación Indonesia de Sindicatos Campesinos (FSPI) para protestar contra los cultivos transgénicos. La protesta se realizó frente al Departamento de Agricultura y luego se desplazó hasta las oficinas de PT Monagro. Los agricultores reclamaron la anulación de la autorización al algodón transgénico y convocaron a un boicot a las semillas y otros productos transgénicos. También amenazaron con destruir cualquier otro producto transgénico que ya hubiera sido distribuido en el país. Los manifestantes compararon la introducción de la agricultura transgénica a la Revolución Verde de los setenta, y sostuvieron que es otra forma de colonialismo que crea nuevas formas de dependencia de los agricultores respecto de los proveedores de insumos agrícolas.⁶

En la medida que el algodón Bt se mostró vulnerable a la sequía y a los ataques de plagas, muchos agricultores se quejaron por las falsas promesas respecto a su superioridad. Algunos cultivadores de algodón Bt informaron que la productividad sólo alcanzó 500 kg por há, muy por debajo de las 3 toneladas por há prometidas por Monsanto. El propio gobierno ha admitido que más del 70 por ciento de los cultivos de algodón Bt no lograron los rendimientos prometidos.⁷ A lo anterior se sumaron otras denuncias. Una mujer denunció que sufrió de irritación en algunas partes de su cuerpo durante casi 10 días mientras cultivaba el algodón. Por otro lado, un oficial del Departamento de Agricultura acusó a organizaciones opuestas a los transgénicos de introducir pestes como *Spodoptera litura* y *S. empoasca* en los cultivos de algodón Bt.

En episodios de desobediencia civil, los agricultores exigieron explicaciones al gobernador de Sulawesi del Sur sobre los motivos por los cuáles se autorizó que la provincia se usara como campo de pruebas de tecnologías controvertidas, que terminaron siendo un fracaso⁸. También exigieron que no se plante más algodón Bollgard, ni otros cultivos transgénicos en Sulawesi del Sur. En el sudeste de Sulawesi del Sur, durante un ritual tradicional llevado a cabo por miembros de la comunidad Kajang, los aldeanos equipados con vinchas negras y espadas gritaban con enojo "¡Monsanto vete al diablo!" El jueves 13 de setiembre de 2001 se enarboló un cartel con la leyenda "Maldito seas Monsanto", rodeado de varios espantapájaros que luego fueron quemados en un área cultivada con algodón Bt de la aldea Desa Bontobiraeng en Kecamatan Kajang, Bulukumba. Casi 2 toneladas de algodón en rama también fueron quemadas por cientos de aldeanos. Seguidamente se quemaron alrededor de 50 hectáreas cultivadas con algodón Bt. Judy Rahrdo, vice presidenta de la organización de Consumidores de Sulawesi del Sur en Indonesia, informó que en los próximos días se quemarían nuevas áreas cultivadas con algodón Bt.

resistiendo la imposición de semillas transgénicas para la industria textil: el caso del algodón bt en indonesia | parte siete

por walhi/amigos de la tierra indonesia

la política de indonesia sobre productos transgénicos

Subestimando la controversia, PT Monagro Kimia desestimó el incendio como producto del accionar de las organizaciones no gubernamentales basado en una oposición irracional a los productos genéticamente modificados, a la vez que sostiene que los ensayos son un éxito. Contradiciendo las afirmaciones de los agricultores, sostiene que los ensayos produjeron 1,5 a 3 toneladas por hectárea, hasta cuatro veces el producto de las variedades comunes. Los agricultores, aduce la empresa, pueden no haber logrado cosechar las cuatro toneladas debido a la topografía inadecuada, los suelos porosos y la pérdida de fertilizante por lixiviación. Sea cual sea el rendimiento real, todas las partes concuerdan en que éste fue inferior al esperado, pero Monsanto parece confiar en la continuidad del apoyo gubernamental al citar la promesa del Ministro de Agricultura, Bungaran Saragih, de prorrogar la autorización actual para los ensayos de campo.

En Indonesia no hay una política nacional sobre productos transgénicos. El gobierno no ha realizado ninguna evaluación sobre cuáles productos transgénicos pueden ingresar al mercado indonesio. La capacidad de rastrear y controlar su distribución es también cuestionable. Hasta ahora el público carece de información acerca de a dónde van los productos transgénicos, quiénes los usan y para qué se usan. Actualmente se está elaborando una Ley sobre Bioseguridad, pero se trata de un proceso que se mantiene secreto, y la sociedad civil organizada tiene dificultades para realizar su seguimiento.

A nivel local la situación es aún peor debido a la autonomía regional que ha estado vigente desde el 1º de enero de 2001. En las regulaciones de autonomía regional promulgadas en mayo de 2000 (nº 25/2000) la única referencia a la ingeniería genética está en la sección de inversiones (párrafo 7, inciso 2, capítulo II). Allí se dice que el gobierno central mantiene la autoridad sobre la emisión y control de los permisos de inversión para compañías de "tecnología estratégica" cuyas aplicaciones "altamente sofisticadas" y de "alto riesgo" incluyen armas, tecnología nuclear e ingeniería genética. Asumiendo que las semillas transgénicas están incluidas entre las "semillas y plantines" o entre las "variedades de cultivos comerciales (commodities) agrícolas", el gobierno central es responsable de regular su exportación e importación y de establecer las normas para su liberación y retiro (Capítulo II, Inciso 2, Párrafos 3 y 1(b)). Sin embargo, todavía está por verse qué tanto aplicarán estas reglas los gobiernos de distrito y provinciales - que utilizan la autonomía regional para servir a sus intereses locales.

El caso del algodón Bt en Sulawesi muestra a qué se enfrentan los que defienden el principio precautorio. En 2001 el área total plantada con algodón Bt era de aproximadamente 4,400 hectáreas (involucrando aproximadamente a 6,500 agricultores).⁹ En Sulawesi del Sur, el algodón Bt está siendo impuesto por los funcionarios de los gobiernos locales. Los Bupatis (jefes de distrito) de los dos distritos en los que se llevaron a cabo ensayos del algodón Bt son proclives a ampliar el área cultivada, creyendo que obtendrán altos rendimientos y ganancias adicionales. Ellos, y quienes desde el gobierno apoyan los cultivos transgénicos, argumentan que no existe ningún argumento científico para dejar de plantar el algodón transgénico.

Tal como lo informan las ONGs, el Bupati de Bulukumba declaró que "instruiría" a sus colegas, hasta el nivel de los jefes de aldea, sobre los beneficios del algodón Bt para los agricultores. El jefe de la oficina local de plantaciones dijo que la población de Bulukumba debería estar orgullosa porque su distrito era una zona prioritaria para el cultivo de algodón Bt, y que habría que recordarle a los extensionistas que recomendaran el algodón Bt, y no el Kanesia 7.

9 | "Monsanto contento declara que el proyecto de algodón continuará", The Jakarta Post, 21 de setiembre de 2001

10 | <http://dte.gn.apc.org/>

11 | www.isaaa.org/kc/Status/countries/Indonesia/Indocomsa.html

Aunque la controversia por el algodón transgénico aún está encendida, PT Monsanto no ha dudado en promover los ensayos de maíz transgénico. Esta oferta fue hecha personalmente por el Director de PT Monsanto Indonesia, Kobus Burger, y el Director de PT Harvest International Indonesia, Harvey Goldstein, durante una reunión con el gobernador de Sulawesi del Sur HZB Palaguna, en Makassar el pasado marzo. En realidad, esto no debería considerarse una oferta, ya que Monsanto viene realizando ensayos de campo en secreto en las municipalidades de Gowa y Takalar desde hace dos años.

Los argumentos a favor del maíz transgénico son los clásicos "libre de plagas, menos pesticidas, favorable al medio ambiente, cosecha abundante, bueno para la exportación y por supuesto incrementa el bienestar de los agricultores". Parece ser que el gobernador aceptó esta oferta, al decir que "la tecnología agrícola es inevitable, además es sólo para el ganado y no para el consumo humano".

Este recibimiento de brazos abiertos es una señal preocupante, que muestra que la agricultura transgénica invadirá rápidamente Indonesia si se deja la toma de decisiones en las manos de los Bupatis y los parlamentos locales, que posiblemente desconocen los riesgos potenciales de los organismos genéticamente modificados, siendo en cambio susceptibles al discurso publicitario de las compañías multinacionales de biotecnología. El

Bupati de Bantaeng, Azikin Solthan, ha declarado que espera que bajo la autonomía regional, la toma de decisiones sobre los cultivos transgénicos siga en manos de los gobiernos locales. "Si realmente podemos incrementar los ingresos de los agricultores y aumentar las rentas de los gobiernos locales ¿por qué no hacerlo?" declaró.¹⁰

De hecho, la puerta de entrada a los cultivos transgénicos ya hace tiempo que está abierta de par en par con los ensayos de campo de estos cultivos iniciados en 1999 o antes. Los ensayos de campo que se realizan actualmente incluyen los siguientes cultivos: maíz Bt, maíz Roundup Ready, algodón RR, soja RR (todos de Monsanto) y papa Bt (producida por tres institutos de investigación, incluyendo la Michigan State University). Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agro-biotecnología (ISAAA) financiado por la industria, el maíz Bt, la soja, el maíz y el algodón RR están en proceso de aprobación.¹¹

Monsanto y otros han sido capaces de realizar ensayos y luego vender sus productos en Indonesia con relativa facilidad porque la legislación sobre bioseguridad y seguridad de los alimentos es débil. De acuerdo a las pautas de bioseguridad establecidas por el gobierno, no es necesario emitir ninguna notificación sobre la realización de ensayos de campo o sobre la liberación de organismos genéticamente modificados. Se ha criticado a un decreto ministerial conjunto de 1999 sobre productos genéticamente modificados y seguridad de los alimentos por no incluir requisitos de etiquetado y de evaluación de impacto ambiental. El anterior Ministro de Medio Ambiente, Sony Keraf, asegura que su oficina tiene entre sus prioridades la emisión de un decreto más fuerte (para

abril o mayo de este año), pero es cuestionable qué tanto podrá endurecer las normas. Académicos vinculados al Instituto Indonesio de la Ciencia (LIPI) y otros institutos, han argumentado que Indonesia debe fortalecer su industria biotecnológica si desea competir con otros países en el mercado agrícola.

Las ONGs indonesias que trabajan en los temas de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, están presionando al gobierno para que adopte un enfoque precautorio respecto de los cultivos transgénicos. Estas organizaciones argumentan que no están en contra de los cultivos transgénicos en sí, sino que se oponen a su introducción sin la adecuada regulación por parte del gobierno. Han convocado a una moratoria de los ensayos y la siembra de cultivos transgénicos hasta que se cuente con reglamentaciones adecuadas para salvaguardar el medio ambiente y los intereses de los agricultores, y hasta que el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (firmado en febrero de 1999) haya sido ratificado por el gobierno indonesio. También sostienen que el público debería participar en la toma de decisiones sobre el tema. Actualmente no existe transparencia: los pedidos de las ONGs de tener acceso a los informes sobre la seguridad de los ensayos de algodón, por ejemplo, han sido rechazados.

contaminación genética y derechos de los agricultores: un estudio de caso de Canadá | parte ocho

por Juan Lopez, amigos de la tierra Europa y Larry Bohlen, amigos de la tierra AA.UU

Percy Schmeiser ha pasado cincuenta años cultivando su campo cerca de Bruno, Saskatchewan. Ahora, repentinamente, Schmeiser está luchando contra lo que puede ser la batalla más extraña en la historia de la agricultura. Schmeiser descubrió hace mucho tiempo que el viento es a menudo el peor enemigo del agricultor. El viento sopla las semillas y polen de malezas a los campos cultivados, sofocando los cultivos.

Pero ahora el viento puede haber traído una nueva amenaza al campo de Schmeiser, forzándolo a luchar por el control de las semillas plantadas en su tierra. Schmeiser se ha metido con el chico más grande de la cuadra: Schmeiser está peleando contra la compañía de agroquímicos más grande del mundo — Monsanto.

CBC National, Volando con el viento.

monsanto versus percy schmeiser

A finales de marzo del 2001, un juez canadiense sentenció a Percy Schmeiser a pagar a Monsanto miles de dólares porque se encontró que había una variedad de colza transgénica patentada por Monsanto creciendo en sus campos sin autorización. La decisión fue tomada aunque Percy siempre declaró que el nunca sembró voluntariamente semillas transgénicas, sino que hubo polinización cruzada de cultivos transgénicos de campos vecinos con los cultivos en su propiedad. Varias demandas judiciales han sido presentadas contra agricultores en Norteamérica, pero este es el primer caso que llegó a una sentencia. La Corte Federal de Apelaciones va a revisar su caso en mayo 15 y 16 del 2002.

“En mi caso, nunca tuve nada que ver con Monsanto... nunca firmé un contrato. Si yo fuera a St. Louis y contaminara sus campos -destruyendo todo en lo que han trabajado por 40 años- creo que me pondrían en la cárcel y tirarían la llave.”

Percy Schmeiser, junio 19 del 2000

una vasta comunidad de agricultores contraataca

Las comunidades de agricultores en Canadá están combatiendo la contaminación genética de sus cultivos orgánicos. El 20 de enero del 2002, los agricultores orgánicos de Saskatchewan presentaron demandas judiciales contra Monsanto y Aventis en nombre de todos los agricultores orgánicos certificados de Saskatchewan. El objetivo de la demanda fue obtener indemnizaciones por los daños ocasionados por la introducción de colza transgénica de Monsanto y Aventis, y conseguir asimismo una orden que impidiese la introducción de trigo transgénico de Monsanto en Saskatchewan.

“El trigo es la piedra angular de la agricultura en las praderas y, además, es esencial en las rotaciones de los cultivos orgánicos; perder el trigo por contaminación genética devastaría la agricultura orgánica en Saskatchewan (...) Sentimos que no nos queda otra elección que proceder con una acción judicial. Esto es un asunto de supervivencia para la agricultura orgánica en Saskatchewan.

Arnold Taylor - presidente de la Junta Directiva Orgánica de Saskatchewan (SOD)

La acción judicial también apunta a hacer a Monsanto y a Aventis responsables jurídica y económicamente por la contaminación genética y muchos otros cargos como intrusión ilegal, negligencia y contaminación ambiental.

tradición de guardar semillas amenazada: consecuencias para el sur

El derecho de los agricultores a guardar, usar e intercambiar sus semillas y otros materiales de siembra constituye una piedra angular de la agricultura. Tradicionalmente, los agricultores conservaban sus mejores semillas de año en año. Ahora, sin embargo, los contratos de compra de semillas transgénicas entre las empresas semilleras y los agricultores, estipulan que las semillas sean usadas

únicamente para una zafra. Los agricultores se ven forzados de esta manera a comprar la semilla de esas empresas cada año.

“Yo he estado usando mis propias semillas por años, y ahora a los agricultores como yo se nos dice que ya no podremos hacerlo, si nuestros vecinos plantan cultivos (transgénicos) cuyo polen entra volando a nuestro campos. Básicamente se nos ha quitado el derecho a usar nuestras propias semillas.”

Percy Schmeiser, agricultor canadiense

La apelación judicial entablada por el agricultor canadiense Percy Schmeiser por el derecho a poder guardar sus semillas, subraya la tensión creciente entre los agricultores y las mayores empresas de biotecnología, que amenazan con cambiar para siempre las prácticas tradicionales de la agricultura mediante la introducción de genes patentados. Por la primera vez en la historia de la agricultura, los agricultores corren el riesgo de perder su derecho a guardar semillas, que es un factor esencial para conservar y aumentar la biodiversidad.

Si los agricultores pierden el derecho a guardar semillas, también perderán su autonomía y se harán cada vez más dependientes económicamente de las grandes empresas agroindustriales. En África, más del 90% de las necesidades alimentarias de la población son satisfechas con los sistemas agrícolas autóctonos tradicionales. Guardar semillas es una costumbre de las comunidades indígenas y de las comunidades locales, que garantiza el acceso a sustancias alimenticias vitales en todo momento. Transferir el control de las semillas a las multinacionales socavaría la seguridad alimentaria local de esas comunidades. El impacto mundial sobre las comunidades agrarias podría ser tremendo.

En el Sur, donde es improbable que la población pueda costear la compra de semillas de alta tecnología y los insumos químicos asociados año tras año, la

introducción de semillas transgénicas representa una clara amenaza para la seguridad y soberanía alimentaria de miles de comunidades agrarias indígenas y locales.

percy schmeiser: el testimonio de su lucha contra Monsanto

Mi nombre es Percy Schmeiser. Soy agricultor canadiense. En los últimos 50 años, mi mujer y yo hemos cultivado 1441 acres en Bruno, Saskatchewan. Hemos montado una finca que funciona bien. Las semillas de colza son un cultivo importante para nosotros y solíamos venderlas en todo el mundo para aceites de cocina o alimento de ganado. Como la mayoría de los agricultores en el Oeste de Canadá, yo recogía y guardaba mis propias semillas. Después de años de selección yo obtuve una variedad que daba un buen rendimiento, era bastante resistente a enfermedades locales y crecía relativamente libre de malezas.

En 1997, yo fumigué como siempre las malezas y las plantas de colza dispersas en torno de mis campos con RoundUp. Me sorprendí que tanta colza hubiera sobrevivido a la aplicación. ¿Habría calculado mal la concentración del herbicida? Ahora me doy cuenta que esa fue la primer señal del hecho que mis campos habían sido contaminados con colza transgénica. Mis vecinos y 40% de los agricultores en el Oeste de Canadá plantan colza transgénica. Desde 1993, Monsanto Canadá obtuvo la autorización para emplear una tecnología que hace que las plantas se hagan resistentes a su herbicida, RoundUp. Los agricultores pueden entonces aplicar RoundUp como herbicida de amplio espectro sin dañar sus cultivos transgénicos. En 1995 Canadá aprobó el cultivo libre de colza transgénica y en 1996 las compañías locales empezaron a vender variedades transgénicas.

A pesar de ser dueño del gen y poseer los conocimientos técnicos, es poco lo que Monsanto ha hecho para controlar su invento una vez que éste entró en el medio ambiente. En 1998, los inspectores de Monsanto ingresaron en mi campo sin permiso y tomaron semillas de colza. Me acusaron de plantarlas sin permiso y me demandaron. Si Monsanto sospecha que los agricultores están cultivando semillas de colza transgénica sin su autorización, van y arrancan plantas para su inspección. Si las pruebas

resultan positivas y el agricultor no ha pagado ni el contrato ni las regalías de \$15 canadienses por acre plantada, lo que le espera a continuación es una demanda judicial por infringir los derechos de patente de Monsanto.

En mi caso, las plantas transgénicas se habían esparcido por sí mismas sobre mis campos y habían polinizado mi colza convencional. Para la siembra siguiente yo traté de contener la contaminación transgénica comprando nueva semilla, pero 20% de mi cosecha estaba aún contaminada.

En Canadá no hay una ley que prohíba llevar semillas de colza en camiones abiertos, o dejar colza cortada en el campo. Esto facilita que las semillas pequeñas se esparzan. También es imposible impedir que el polen vuele con el viento. El gen responsable de la resistencia al glifosato es un gen dominante, y la colza una planta de polinización abierta. Cuando se cruza una planta transgénica con colza convencional, la resistencia se transmite a la próxima generación. En mis campos, la variedad transgénica crecía más tupida a lo largo de los caminos. Adentro de los campos había poco de esa variedad. Cuando recibí el emplazamiento del juzgado me pregunté por qué alguien pensaría que yo había mezclado a propósito la semilla transgénica con mi propia semilla.

La única ventaja de cultivar colza transgénica es su resistencia al RoundUp. Si los agricultores fumigan con RoundUp un cultivo mixto transgénico y convencional, no pueden sino esperar grandes pérdidas. En mi defensa yo sostengo que poseer la semilla no viola la patente de Monsanto. Se vuelve violación cuando yo fumigo mi cultivo con RoundUp y activo la innovación -el gen que confiere resistencia al glifosato.

Cuando ese gen se introduce en una semilla o planta, ¿cuáles son los derechos de Monsanto? La semilla y la planta son de propiedad del agricultor. La semilla de colza transgénica tiene la capacidad de invadir donde no fue plantada. Tiene la capacidad única de reproducirse exactamente. Yo considero que Monsanto perdió su derecho de exclusividad cuando perdió el control sobre su invención. ¿Cómo pueden los agricultores evitar que la semilla de colza transgénica se meta en sus cultivos y se convierta en una maleza contaminante? Estas preguntas están

siendo discutidas ahora por la Corte Federal de Canadá.

Schmeiser está enfrentado a Monsanto en la Corte. "Yo voy a luchar, y luchar y luchar (...) Porque yo creo que lo que nos está pasando a los agricultores está equivocado. Y estoy peleando esto no solo para mí, sino para mi hijo y mis nietos y por los amigos de mis amigos agricultores."

CBC National.

Hoy en día no podemos vender nuestra semilla de colza en el extranjero, y otros productos también se ven afectados. Justamente hace poco Holanda rechazó un envío de miel porque estaba contaminada con material transgénico. Los agricultores orgánicos en nuestro distrito tienen un problema serio puesto que no pueden certificar su producción como orgánica, ya que no cumplen con el requisito de estar libres de material transgénico.

Los agricultores temen las consecuencias financieras de entrar en litigio. Hoy enfrento cuentas por gastos judiciales que ascienden a \$160,000 más \$40,000 canadienses. Los gastos de Monsanto ascienden a \$400,000 canadienses. Si yo pierdo tendré que pagar también los gastos judiciales de Monsanto. Pero tengo que pelear. Sé por el apoyo que he recibido de todo el mundo que los agricultores necesitan proteger su derecho a elegir la tecnología que usan, los cultivos que siembran y las semillas que guardan. Especialmente en los países en vías de desarrollo, el sustento de los agricultores depende de su derecho y capacidad de seleccionar y guardar las semillas adecuadas y mantener un balance ecológico en sus campos.

Yo entablé una contra-demanda contra Monsanto. Yo sé que muchos agricultores están pendientes del desarrollo de mi lucha. La Corte Federal de Apelaciones estará revisando mi caso el 15 y el 16 de mayo del 2002. Usted puede seguir mi caso visitando www.percyschmeiser.com



Garantizar la bioseguridad y detener la pérdida de biodiversidad requiere acciones urgentes que aborden la amenaza directa que representan los OGMs y el modelo de producción agropecuaria de la Revolución Verde para la biodiversidad, y las amenazas que representan los acuerdos de libre comercio para los custodios y curadores tradicionales y contemporáneos de la biodiversidad --los pueblos indígenas, los pequeños y medianos productores agrarios de bajos insumos, y los agricultores orgánicos/ecológicos.

A continuación presentamos una selección de algunas de las medidas más urgentes que deben tomarse para impedir que los actores políticos y económicos que agencian la imposición de los OGMs y el modelo de producción agropecuaria de la Revolución Verde socaven nuestra bioseguridad y biodiversidad local y global. Adoptando estas medidas, los responsables por la toma de decisiones darán un paso adelante hacia la protección de los ecosistemas y los pueblos que mantienen la biodiversidad del planeta y la estabilidad ecológica y, asimismo, hacia la instauración de las condiciones políticas, económicas e institucionales necesarias para una bioseguridad y conservación de la biodiversidad perdurables.

- Los gobiernos nacionales y los organismos internacionales deben consagrar y respetar la soberanía alimentaria de los pueblos, definida como el derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir sus propias estrategias y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos sanos y accesibles para toda la población.
- Los derechos a fuentes renovables de energía y al agua en cantidad y calidad suficiente para una vida digna para todos deben ser reconocidos y consagrados por los gobiernos nacionales y los organismos internacionales, garantizando que el agua sea un bien público, no sujeto al lucro y las leyes del mercado.
- La deuda ecológica del Norte con el Sur debe ser reconocida, y debe anularse de inmediato la deuda financiera de los países del Sur con los acreedores del Norte.
- No debe permitirse que los instrumentos de la OMC prevalezcan sobre los acuerdos ambientales multilaterales (AAMs).
- Las prioridades de la bioseguridad para proteger el medio ambiente y la salud humana no deberían estar subordinadas a las prioridades comerciales impuestas a través de las normas de la OMC; a tal efecto, entonces, deben crearse mecanismos conjuntos de aplicación y acatamiento para los AAMs.
- Los gobiernos deben firmar y ratificar el Protocolo de Bioseguridad tan pronto como sea posible, e implementar así un marco regulatorio mínimo para proteger la biodiversidad a nivel mundial. Los países deberían crear también marcos regulatorios nacionales sobre los OGMs y sus productos.
- La liberación de cultivos transgénicos debe prohibirse en los países que son centros de origen y diversidad, tanto los OGMs para plantar como aquellos para alimentos, raciones animales y procesamiento.
- Los gobiernos deben tener el derecho de aplicar el principio precautorio y establecer prohibiciones o moratorias a la introducción de OGMs. Debe garantizarse un monitoreo efectivo y capacidad de ejecución.

- Se requiere capacidad científica adecuada para garantizar el cumplimiento de las normativas sobre bioseguridad en cada país, y los análisis de presencia de OGMs constituyen una de las mejores herramientas disponibles para monitorear el acatamiento de las normativas.
- Se debe establecer un sistema que garantice la responsabilidad jurídica y económica de las empresas en caso que no se impida la contaminación.
- El Programa Mundial de Alimentos deber ser objeto de una auditoría internacional independiente que examine la viabilidad económica, social, tecnológica, cultural y ecológica de la ayuda alimentaria.
- Los gobiernos nacionales deben reconocer plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los agricultores, inclusive su derecho a la tierra (incluido el derecho de propiedad para las mujeres) y a guardar su propia semilla, y el derecho a negarse a dar acceso a los recursos en su territorio, aún cuando se les haya pedido consentimiento previo informado.
- El derecho de los agricultores a guardar semilla nunca debe arrebatarle a los agricultores y las comunidades locales. Los gobiernos deben apoyar las iniciativas de las comunidades indígenas y locales para guardar sus semillas tradicionales, intercambiarlas, cultivarlas y mejorarlas.
- No se deben otorgar patentes ni otros tipos de derechos de propiedad intelectual sobre semillas ni cualquier otro material vivo.
- Se debe crear una legislación internacional y mecanismos de ejecución adecuados para prohibir con eficacia todo tipo de biopiratería.
- Los gobiernos deben promover alternativas a los OGMs y otras formas de agricultura insustentable, tales como la agricultura orgánica y la agroecología. Las políticas gubernamentales deben brindar apoyos adecuados para las prácticas y la producción agroecológica/orgánica como base de las políticas agrarias y el desarrollo rural nacional, y como una alternativa completamente viable a los monocultivos transgénicos.
- Los gobiernos nacionales deben trabajar por el establecimiento de un marco regulatorio vinculante para controlar las actividades corporativas, a fin de que no afecten negativamente sobre la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos de la mayoría de la población del globo incluyendo las mujeres, los Pueblos Indígenas y las comunidades agrarias locales que han sido los custodios y curadores de la conservación de la biodiversidad a lo largo de la historia.





Esta publicación fue posible gracias al soporte de novib y hivos.